

El régimen político argentino a finales de la década: ¿democracia impotente o cómplice?

ALFREDO R. PUCCIARELLI*

Resumen: El régimen democrático argentino se halla enfrentado a una nueva situación paradójica. A medida que crece y se afirma el apoyo popular a sus instituciones se agudiza su ineffectividad, es decir, se profundiza la crisis del sistema representativo, se vacían de contenido las propuestas políticas y se produce una virtual extinción del poder y la autonomía del Estado. En función de ello, se analiza la situación actual de la democracia desde una nueva perspectiva: la consolidación de un nuevo régimen que a la vez que fortalece el funcionamiento de las instituciones republicanas y de las reglas democráticas, crea complicidad y establece un compromiso activo con un esquema de dominación social que busca su legitimidad con nuevos métodos.

Abstract: The Argentinean democratic regime is currently facing a new paradoxical situation. As popular support for its institutions increases and is affirmed, the ineffectiveness of the latter increases; in other words, the crisis of the representative system becomes more acute, political policies are emptied of content and State power and autonomy are virtually eliminated. As a result of this, the article analyzes the current status of democracy from a new perspective: the consolidation of a new regime which, at the same time that it reinforces the functioning of republican institutes and democratic rules, creates complicity and establishes active commitment through a system of social domination that seeks to establish its legitimacy through new methods.

Palabras clave: democracia, instituciones republicanas, transición.

Key words: democracy, republican institutions, transition.

INTRODUCCIÓN

CON EL ÚLTIMO TRASPASO PRESIDENCIAL DE FINALES DE 1999, el régimen democrático en la Argentina parece haberse deshecho definitivamente de los viejos fantasmas que determinaron su crónica inestabilidad durante medio siglo y finalizado un largo y complejo periodo de transición. En efecto, el sistema político institucional que hoy está vigente tiene una serie innumerable de limitaciones pero es estable, funciona razonablemente y se halla definitivamente consolidado. Por esa causa, parece haber llegado el momento de interrogarnos acerca de la naturaleza específica de este régimen democrático; de las causas y los procesos que lo condujeron a la estabilidad actual; del tipo de relaciones que ha establecido con las instituciones republicanas, y de la influencia que ejerce en el modo de hacer y pensar la política en el momento actual. Para ello, trataremos de interpretar algunos de los muchos acontecimientos ocurridos durante el año de gran actividad política que finalizó con la elec-

* Dirigir correspondencia a Calle Cabello 3957-80, 1425 Ciudad de Buenos Aires, Argentina, tel. (011) 4803-3561 y (0221) 480-2786, fax: (0221) 720-393 e-mail: arpu@enterar.com.ar.

ción del doctor De la Rúa como nuevo presidente de la nación. Para evitar interpretaciones excesivamente especulativas de estas cuestiones, utilizaremos como apoyo empírico las descripciones e interpretaciones elaboradas por analistas y periodistas especializados durante el transcurso de la campaña electoral.

Las características plebiscitarias del aplastante triunfo electoral que posibilitó la reelección del presidente Menem, a finales de 1995, enriquecieron con nuevos elementos empíricos los términos de un debate iniciado poco tiempo atrás en torno a la naturaleza del vínculo que se ha ido estableciendo, a lo largo de la última década, entre el proceso de exclusión social —provocado por la aplicación del proyecto económico neoliberal— y el nuevo proyecto de participación ciudadana, relacionado con la construcción de un nuevo tipo de régimen político, democrático, estable, legítimo y dotado de capacidad para gobernar. Dicho de otro modo, la creciente insatisfacción social de una porción cada vez mayor de la población —no expresada todavía en claros términos políticos— genera un nuevo tipo de amenaza que reinstala, de un modo acuciante y diferente, el viejo dilema histórico de la democracia: la creación de un punto de equilibrio posible entre la generación permanente de posiciones sociales desiguales y asimétricas y la proclamación, también permanente, pero incongruente, de derechos igualitarios en el ejercicio de la política. O la igualdad política trasciende su propio ámbito y se legitima al promover desde el Estado la disminución de la desigualdad social o, por el contrario, la desigualdad social se exagera, poniendo aún más distancia real respecto de los postulados igualitarios de la proclama liberal-democrática y genera demandas por dentro y por fuera del sistema político institucional.

Por ese camino, parece inevitable el inicio de un nuevo proceso de degeneración del sistema democrático. Eliminada la lucha contra la amenaza del golpe militar y también, por ahora, contra la militarización del régimen político que caracterizó periodos anteriores, la democracia perdura, se fortalece y se legitima, en la actualidad, de un modo paradójico: vaciándose de contenido y desnaturalizando sus objetivos. Se reduce en forma alarmante el papel de la práctica política concebida como instrumento de resolución de problemas sociales y se la reemplaza por un complicado esquema de representación escénica y de delegación electoral que pone en profunda crisis las formas tradicionales de construir ámbitos de poder y medios de representación político-electoral (Novaro, 1995). Ambos fenómenos, unidos al creciente poder que han ido adquiriendo los medios de comunicación, promueven la apatía y el descreimiento de sectores cada vez más amplios de la sociedad en lo tocante a las bondades de un régimen que los incita a delegar el poder en un nuevo tipo de fracción burocrático-política, a la vez que los va privando de su propia ciudadanía (O'Donnell, 1992). En ese contexto, no debe extrañar el creciente desapego hacia la *fórmula democrática* y la aparición de nuevas expresiones de la antigua *tentación totalitaria*, tales como la reivindicación político-electoral de militares represores y funcionarios destacados de la dictadura militar, el desarrollo desmesurado del presidencialismo, la creciente heteronomía de los poderes republicanos y las veladas pretensiones hegemónicas de los partidos mayoritarios (Botana, 1995).

PROBLEMAS, DILEMAS Y CONTRADICCIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA ACTUAL

Las sustanciales modificaciones generadas por lo que en otro lugar hemos denominado “la revolución conservadora”, ocurrida durante la década de 1990, dejaron al finalizar el mandato del presidente Menem un saldo realmente desalentador y presentaron en forma agravada algunos de los rasgos centrales del diagnóstico que elaboramos hace unos años y expusimos posteriormente en un trabajo reciente (Pucciarelli, 1999). El modelo económico que resultó relativamente exitoso para estabilizar el funcionamiento de la economía, recuperar una tendencia de crecimiento cíclico que se había perdido durante los quince años anteriores y reinsertar nuestros mercados tradicionales en el nuevo contexto internacional generado por la globalización, no ha podido resolver, sin embargo, ninguno de los problemas estructurales endémicos que generó la estrategia de posguerra de industrialización sustitutiva de importaciones. Continúa manteniéndose una enorme brecha entre las tasas de ahorro y de inversión de capital. La tradicional vulnerabilidad externa del modelo anterior se ha agravado severamente por la explosiva combinación que se ha venido dando en los últimos años entre el déficit comercial externo y el gran crecimiento de los montos de la deuda externa; el país ha sido endeudado, o sea que con el crecimiento de la deuda de la última década los montos requeridos para su amortización son muy superiores a los que puede generar actualmente nuestra economía, aun en sus mejores condiciones de funcionamiento (Nudler, 2000)

Estos elementos, que ya estaban veladamente presentes en el primer ciclo exitoso del plan de convertibilidad, se transformaron en graves problemas de muy difícil solución en el momento en que Brasil, nuestro socio principal del Mercosur, resolvió devaluar su moneda para enfrentar de un modo diferente su propia crisis económico-financiera. Como es sabido, esto creó una sensible diferencia de competitividad entre los productos agroindustriales exportados por Argentina y los productos manufacturados de consumo masivo exportados por Brasil, lo cual agudizó una recesión preexistente, disminuyó mucho el nivel de actividad y volvió a ubicar en niveles alarmantemente elevados los índices de desocupación y subocupación de nuestra mano de obra. No obstante, en realidad, la inversión del flujo de intercambio con el mercado brasileño es sólo una parte de un proceso aún más grave de pérdida de competitividad con el resto de los mercados mundiales. La causa estructural de ese fenómeno es, como hemos dicho, el atraso tecnológico, la desarticulación interna y el bajo nivel de inversión de nuestra estructura productiva, pero la causa inmediata que potencia en gran medida dichas limitaciones históricas es consecuencia del mantenimiento del *plan de convertibilidad* en sus actuales términos: la relación uno a uno respecto del dólar ha provocado un sobrevaluación de alrededor del 30% de nuestra moneda.

La profunda recesión de 1999, entonces, volvió a enfrentar aún más dramáticamente a la sociedad argentina con sus viejos dilemas históricos: inestabilidad, crecimiento cíclico, vulnerabilidad externa, deuda externa, desindustrialización, etc., aunque se-

veramente agravados ahora por los efectos perversos que ha generado la consolidación del modelo neoliberal global que dio lugar al *plan de convertibilidad monetaria*. La vulnerabilidad externa se ha convertido en crisis de la balanza comercial y de la balanza de pagos e, indirectamente, en crisis fiscal; la deuda externa se ha convertido en endeudamiento; el modo de crecimiento cíclico unido a la estrategia de primarización de la economía y de crecimiento invertido ha agudizado hasta límites intolerables los problemas de la desocupación. El proceso de expropiación-concentración de los ingresos no cesa y ha generado un nuevo tipo de *cuestión social* que combina de modo perverso, por primera vez en la historia de nuestro país, caída general de los ingresos con aumento de la desocupación y el crecimiento de la pobreza. La crisis fiscal no sólo amplía el endeudamiento, también ha puesto en crisis, cuando no en estado de colapso, al sistema de salud, al sistema educativo, a la seguridad social, al sistema de seguridad personal y, en fin, a todos los servicios sociales que dependen directa o indirectamente del buen funcionamiento de las instituciones del Estado.

EL VACÍO DE IDEAS EN EL ÚLTIMO DEBATE ELECTORAL

Es habitual suponer que problemas de tanta envergadura generan, a su vez, grandes momentos políticos que en los regímenes democráticos tienden a coincidir, a su vez, con los periodos electorales. En tales ocasiones se definen las cuestiones prioritarias, se elaboran diagnósticos, se confrontan interpretaciones y, a través de las propuestas de los candidatos, se arma un panel con las soluciones posibles. Una parte del electorado se mantiene relativamente indiferente y toma sus decisiones simplemente por lealtad a antiguas y complejas tradiciones partidarias, pero, otra parte opta de un modo diferente, teniendo en cuenta, de un lado, el tipo de cuestiones prioritarias definidas por los candidatos y, del otro, los programas y las acciones propuestas para llevarlas a cabo. Es posible identificar a la inmensa mayoría de las elecciones realizadas en la historia argentina y, especialmente, a las que integran el periodo de transición iniciado después de la última dictadura militar, por la construcción de grandes escenarios políticos en los cuales adquirieron tanta importancia los grandes protagonistas como las grandes cuestiones que le daban forma a los debates y a las propuestas en cada circunstancia.

Siguiendo esa tradición, la última convocatoria electoral debería haberse convertido en una ocasión propicia para entablar una amplia controversia en lo referente a los modos de enfrentar y resolver los complejos problemas que dejó como herencia la prolongada gestión del gobierno menemista: ¿existe la posibilidad de modificar sustancialmente el modelo de desarrollo capitalista que nos ha conducido a esta especie de callejón sin salida, o es más conveniente mantener sus componentes esenciales modificando, mediante políticas estatales activas, los aspectos más regresivos de su modo de funcionamiento? ¿Es posible modificar aspectos centrales de la nueva *cuestión social* sin encarar profundas transformaciones de los mecanismos implantados de producción, distribución y apropiación de los bienes materiales y simbólicos disponi-

bles, o los problemas sociales tienen una serie de causas y especificidades que no derivan del funcionamiento de los mecanismos de distribución de la riqueza y pueden ser corregidos sustancialmente con políticas estatales adecuadas e independientes de la dinámica de la economía; o, en definitiva, los problemas sociales e institucionales serán corregidos automáticamente y gradualmente por el mercado a través del *efecto derrame*, es decir, por la intensificación del crecimiento económico, y requieren mientras tanto políticas sociales y estatales de *contención* de los sectores *más desfavorecidos*, tal como lo plantean la mayoría de los organismos internacionales?

Sin embargo, en abierto contraste con todas las experiencias anteriores, la última campaña parece haber marcado el punto culminante de un agudo proceso de vaciamiento de ideas y proyectos políticos, cubierto bajo el manto de un complicado discurso acerca de los estrechos límites que le ha puesto al diseño de proyectos destinados a regenerar el tejido social tanto la modificación del contexto internacional como la fuerte relación de dependencia generada por las crisis y el crecimiento incontrolado de la situación de endeudamiento. Frente a la extrema complejidad de problemas acumulados que hemos venido reseñando brevemente, por primera vez en Argentina la clase política ha construido durante la última gran elección presidencial un escenario asombrosamente simplificado, un tipo de espectáculo mediático que responde, a su vez, a la reorganización audiovisual de la esfera política, donde el papel dominante lo desempeña la *imagen* física, y simbólica, de los candidatos y se excluye, deliberadamente, no sólo la confrontación de propuestas sino la propia identificación de las grandes cuestiones del momento.

Como si se les hubiera contagiado el estilo distante, frívolo y superficial que exhibió el elenco gobernante saliente durante los diez años de su gestión, tanto los partidos como los principales candidatos establecieron un acuerdo tácito respecto de las características dominantes de la confrontación: evitar las convocatorias, actos y movilizaciones; ocultar las propias ideas; no criticar las ideas de los opositores, y sólo presentar argumentos circunstanciales, dictados por la necesidad de mejorar las posibilidades de triunfo que fue señalando periódicamente la encuestología electoral. Fueron reemplazando, de este modo, la tarea propiamente política de la contienda electoral por un interminable forcejeo para acceder a los papeles más destacados dentro del espectáculo telepolítico, para mejorar su posiciones dentro de los espacios de poder a conquistar, o para sumar votos circunstanciales, mediante alianzas también circunstanciales, basadas en el reparto de esos espacios de poder (Dotti, 1999). Dice el columnista C. Gabeta (1999).

La desesperanza actual proviene de que la clase política ha abandonado el proyecto de República. Muchos se ofenderán al leer esto, pero ningún republicano eludiría el planteo de los principales problemas tal como nuestros políticos progresistas lo hacen desde hace años; ninguno considera razonable ni digno que la campaña electoral haya comenzado por un “debate” —que cuesta mucho dinero— sobre la condición de aburrido de uno de los candidatos.

Sin embargo, lo que es motivo de escándalo para algunos liberales republicanos, se transforma en un signo positivo de afirmación de un nuevo tipo de democracia procedimentalista para otros liberales conservadores: “Cuando votemos el 24 de octubre, más que una plataforma o un partido estaremos eligiendo un carácter. Más que una plataforma o un discurso escogeremos un hombre, con sus virtudes y defectos al frente del Estado” (Grondona, 1999a). Si analizamos las elecciones legislativas de 1997, C. Altamirano ya había llegado a conclusiones similares y les adjudicaba, además, otro rasgo característico, el inmediatismo: “enfrentamos, por primera vez, un periodo en que la política no es asistida por una visión teleológica de la historia, ni del progreso, ni de la revolución. La caída de la idea de futuro, asociada a la crisis de la idea de progreso, trastorna el modo en que habitualmente nos hemos representado la política” (1998:22)

Es necesario poner de relieve que este ominoso desplazamiento hacia las luchas de la ingeniería electoral se desarrolla frente una asombrosa pasividad de la inmensa mayoría de la sociedad y de sus fuerzas sociales representativas que no presionan ni reclaman ni se manifiestan pidiendo un cambio de los contenidos ni de los procedimientos de la actividad política. El extraordinario éxito de la estrategia *vacia* de la Alianza electoral y el perfil definitivamente conservador de su candidato triunfante (Morales Solá, 1999) no pueden ser explicados si no se tiene en cuenta, además, que reflejan de algún modo el estado de ánimo deprimido y la grave ausencia de expectativas de cambio de una gran parte de la población (Novaro, 1999). La evidente apatía que acompañó a todo el proceso electoral, obedeció a diversos tipos de causas; algunas son producto tanto de la sensible disminución de las tradicionales movilizaciones de apoyo a las demandas populares como al cambio de estilo y contenido de las luchas sociales y, especialmente, de los conflictos gremiales. “Lo fundamental es recuperar la confianza en nosotros mismos”, manifestaba A. Piccinini, un legendario dirigente gremial clasista y combativo, en un reportaje donde analiza los grandes cambios operados en las organizaciones gremiales durante los últimos 15 años y el proceso de *desmovilización* y de *despolitización* de la clase obrera y los sectores populares (Bruschtein, 1999). El virtual abandono de las consignas reivindicativas, unida a la pronunciada disminución de los reclamos y demandas populares, puede aportar una clave para entender no sólo la igualdad de los discursos y el desliz hacia la derecha de los partidos mayoritarios, sino también el altísimo grado de convivencia y de estabilidad institucional democrática que caracteriza a este final del proceso de transición (Nielsen, 1999).

Junto con la eliminación de los debates políticos acerca de problemas sustantivos de la economía y de la sociedad, fue relativamente fácil observar otro nuevo fenómeno: la eliminación de las históricas diferencias de estilos y de proyectos políticos que siempre enfrentaron, en la escena electoral, a los dos agrupamientos partidarios dominantes. Se vio claramente, además, que en esa especie de danza de las grandes coincidencias subyacía un acuerdo tácito en lo tocante a la necesidad de mantener vigentes y sin modificación los parámetros fundamentales del actual modelo económico, e intoca-

bles los complejos mecanismos de poder económico y social que continuaban impulsando los procesos de redistribución regresiva del ingreso, de exclusión y de polarización social (Aliberti, 1999). El punto culminante de este proceso fue la exposición conjunta que debieron realizar los expertos nominados como posibles ministros de economía de los dos principales candidatos frente a los representantes de la banca internacional en Nueva York. Allí, se esforzaron en poner de relieve las grandes coincidencias básicas interpartidarias que se habían logrado en Argentina sobre el futuro de la gestión económica y, especialmente, sobre el resguardo de las reformas realizadas por la gestión anterior y sobre el puntual cumplimiento de los compromisos financieros ya contraídos.

Poco tiempo antes, los mismos personajes ya habían realizado varios ensayos generales de representación frente a una clase muy similar de espectadores-observadores.

El columnista político de *Página 12* afirmaba:

acaba de verse en Buenos Aires a los economistas de los principales candidatos presidenciales rindiendo examen ante los banqueros, que los convocaron para medirles la temperatura en público, a la vista de todos. Hay que ser especialista para distinguir las diferencias, si las hay, entre los examinados, pero a todos quedó en claro lo que quieren los convocantes: menos Estado y más disciplina laboral... *más* de lo mismo (Pasquini Durán, 1999a).

En un reportaje publicado pocos días después, Llach (1999), ex miembro del equipo económico del ex ministro Cavallo y uno de los principales intelectuales de la ultraliberal Fundación Mediterránea, hizo tres importantes afirmaciones que permiten llegar, desde una posición totalmente opuesta, a la misma conclusión: Machinea al igual que Remes Lenicov tiene muy clara la idea de no retroceso. Existe un consenso muy importante en torno a la economía para Argentina, casi sin precedentes históricos. El consenso político en favor de sostener las grandes líneas de la política económica surgió por la disciplina que impusieron los mercados. Los grandes inversionista pondrán un límite al próximo gobierno para encarar políticas que no se ajusten a su gusto.

Ambos acontecimientos muestran, además, cómo se manifiestan en la práctica los nuevos *consensos amplios* interpartidarios de las democracias neoliberales. Al analizarlos, I. Cheresky prefiere denominarlos “consensos blandos” porque muestran contornos indefinidos y, dice, son “más proclives a la preservación del *statu quo* que interesados en las reglas del juego y en los valores democráticos. Proviene de una vieja concepción conservadora de la democracia que coloca en el centro el tema de la gobernabilidad, es decir, de la democracia como un sistema de equilibrios y negociación regidos desde el poder del Estado” (1998:35). Como veremos más adelante, es también un consenso antipolítico, o que produce un vacío político, porque subordina la política a la economía, reniega explícitamente del concepto de representación política y tiende a desplazar la clásica confrontación social expresada en el enfrentamiento político hacia un nuevo tipo de competencia de saberes. “Se suele discutir —y coin-

cidir— acerca del paupérrimo espacio que la economía le dejó a la política. En realidad, viene a ser un eufemismo por el modo en que los monumentales dueños de la riqueza desplazaron a los dirigentes políticos, en general, de la toma de decisiones centrales (o bien de cómo éstos se allanaron a aquéllos)” — afirma un columnista del diario *Página 12*— y concluye que si en términos de la pobreza de ideas, la campaña electoral de 1995 parecía habernos llevado hasta el punto más bajo, esta campaña ha vuelto a superar nuestra capacidad de asombro porque “ya no se trata de lo pobre de la discusión sino que directamente no se discute nada” (Aliberti, 1999b)

Al intercambiar ideas acerca de las características de la campaña electoral, un grupo de destacados intelectuales independientes elaboró la misma interpretación y llegó a una notable conclusión que pone aún más de manifiesto el proceso de omisión de ideas y propuestas que caracterizó tanto a la actividad política como a la oferta electoral. El proceso de redistribución regresiva del ingreso y el empobrecimiento de los sectores populares que condujo al actual estado de polarización social, afirmó, es el tema que reclama soluciones más urgentes en el momento actual. Sin embargo, ese tema no fue considerado en la campaña ni se tomó como punto de partida para impulsar propuesta alguna de gobierno, como podría ser, por ejemplo, la modificación de la estructura impositiva nacional que es una de las más regresivas del mundo periférico.

De eso no hablan los Radicales pero tampoco los dirigentes del Frepaso, ambos son, en materia impositiva, completamente conservadores [...] De este modo, la redistribución por vía impositiva no es bandera de nadie. Quizás, entonces, deba ser nuestro tema en el mismo sentido en que “juicio y castigo a los culpables” fue un reclamo levantado por las organizaciones de derechos humanos [...] en la época de la dictadura (Altamirano *et. al.*, 1999).

En esa última posición ya se había instalado el sociólogo J. Nun (1999) cuando advertía infructuosamente, en un artículo periodístico publicado en plena campaña electoral, que si no había intención de encarar grandes cambios, era aún posible modificar levemente la injusticia distributiva reintegrando, al menos, el impuesto a la herencia, eliminado durante la última dictadura militar.

EL PAPEL DE LOS POLÍTICOS Y DE LA POLÍTICA EN LA NUEVA SOCIEDAD DE MERCADO

Como se ha visto, el comienzo del periodo de consolidación nos muestra un tipo de democracia que parece necesitar para sobrevivir pacíficamente un muy bajo nivel de conflictos sociales, de demandas populares y, sobre todo, un proceso multifacético de licuación de los términos tradicionales de la confrontación electoral democrática. Los aspectos más relevantes de este proceso son la no identificación ni análisis de los problemas sociales fundamentales del momento; el acercamiento hacia las ideas conservadoras de los partidos populares; la adopción mayoritaria de cierto tipo de ideología *posibilista*, y la aparición de un nuevo elenco de políticos pragmáticos que no confrontan entre sí para imponer proyectos sino para obtener espacios de poder.

Para el actual liberalismo conservador de nuestros países periféricos, el propio concepto de consolidación democrática sólo puede ser utilizado cuando, en situaciones como la que estamos analizando, el cambio de elencos gubernamentales después de una gran elección significa solamente un cambio en el estilo de ejercer la administración de la cosa pública, sin incidir sobre ninguno de los centros neurálgicos del poder económico y social. En función de ese objetivo, M. Grondona (1999b y 1999c) elaboró y difundió, al promediar la campaña electoral, en su columna semanal del diario ultraliberal *La Nación*, una especie de teoría de la consolidación de la democracia que se desarrolla en tres etapas. De acuerdo con esa interpretación, en la primera el presidente Alfonsín puso los cimientos de un tipo de *democracia pluralista y tolerante*, sensiblemente diferente a todas las experiencias anteriores que se registran en la historia argentina. En la segunda, la extensa gestión del presidente Menem creó las bases indestructibles de un nuevo tipo de capitalismo neoliberal de mercado, estable, previsible, con capacidad de crecimiento y totalmente integrado al nuevo mundo globalizado. En la tercera (que para esa época no había comenzado todavía), se debería encarar el gran cúmulo de tareas pendientes que dejaban los problemas todavía no resueltos por la economía ni por las instituciones estatales, pero sólo bajo la condición de que fueran concebidas como perfeccionamiento de un nuevo modelo de sociedad ya consolidada y generada por la integración de los resultados obtenidos en las dos etapas anteriores. Dentro de ese nuevo marco de consagración de lo ya obtenido debe ser interpretada la aparente pobreza política de la campaña y, especialmente, las imperceptibles diferencias programáticas mostradas por los dos candidatos principales.

El vacío de las ideas con que se construyen las reivindicaciones y los proyectos políticos es, entonces, consecuencia de la subordinación de la política a la administración de las cosas, de los políticos a los portadores del saber técnico, de los representantes del pueblo a los delegados de los grandes centros de poder, etc., pero tiene su causa fundamental en la expansión de la *sociedad de mercado* (Abraham, 1999; Beck, 1998). Con este desplazamiento, la política no sólo tiende a perder el carácter de actividad dominante y casi exclusiva que había detentado en el pasado para procesar y ordenar la resolución de conflictos y contradicciones sociales, sino que también deja de constituir el lugar soberano de creación, de confluencia y de confrontación de proyectos, propuestas y empresas políticas relacionados con el futuro imaginado. Esa enorme pérdida de poder social, sumada a un conjunto de nuevos factores sociales y culturales que mencionaremos más adelante, la vuelve impotente para frenar el proceso de virtual decadencia en que se encuentra su propio ámbito específico: las instituciones y actividades públicas, la intervención participativa, los agrupamientos colectivos, el compromiso social y los valores solidarios (Lechner, 1996).

El vacío de ideas y recursos de la práctica política basada en esos fundamentos del pasado no significa, sin embargo, una pérdida de todo fundamento. Dicho vacío opera como paso previo para otorgarle una nueva función: deja de establecer una relación de *intercambio* con el mercado, a través del Estado, para funcionar como intermediario como vaso comunicante, entre el mercado y la sociedad; tal actividad consiste en ex-

traer objetivos, criterios organizativos y valores propios de la producción mercantil para utilizarlos como fundamentos y punto de partida de un vasto movimiento de reorganización material, institucional y simbólica del conjunto de la sociedad.

Si lo analizamos en su desarrollo, ese proceso de subordinación durante el periodo de transición democrática en Argentina pasó por cinco etapas. Comenzó, primero, con una fuerte afirmación del poder transformador de la política en democracia y de autonomía del Estado cuando ambas fueron legitimadas por la voluntad popular. Con la democracia se come, se cura y se educa, afirmaba el presidente Alfonsín durante la campaña electoral, sin advertir empero que recibía una economía en franca declinación y un Estado fuertemente endeudado, en un nuevo contexto internacional marcado por el ascenso irrefrenable del pensamiento neoliberal. Se abrió de ese modo una fuerte disputa entre el Estado, el *mercado* nacional y los organismos internacionales para dirimir quién o quiénes tenían el poder de decisión en última instancia. La confrontación tuvo una serie de vaivenes pero finalizó, como es sabido, con dos estallidos hiperinflacionarios y sucesivos *golpes de mercado* que licuaron literalmente el poder estatal y obligaron al titular del poder ejecutivo saliente a adelantar seis meses la fecha de transmisión del mando presidencial.

Segundo, con el pleno reconocimiento por parte del nuevo elenco gubernamental del enorme debilitamiento del poder y la autonomía del Estado y la aceptación del nuevo tipo de correlación de fuerzas sociales que produjo la disputa del periodo anterior se concluyó que el Estado debía dejar de intervenir en la economía y llevó a cabo un fulminante proceso de privatización de las empresas estatales y de eliminación estatal de los controles y las regulaciones de la actividad económica. Favoreció la organización de un nuevo tipo de economía capitalista autónomo y autorregulado que coincidió con la adopción de la primera etapa del Plan de Convertibilidad Monetaria.

Tercero, comenzó de ese modo a establecerse una nueva situación de mutua independencia entre economía y política, en la cual se discutía, por un lado, el crecimiento y el nuevo perfil de las actividades productivas y, por otro, el papel, el tamaño y la estructura de un Estado mínimo u óptimo. El nuevo balance de poderes estableció una nueva tendencia: a medida que transcurría el tiempo, el capital concentraba cada vez más atribuciones para decidir las políticas generales y particulares de inversión y, de ese modo, el tipo y el ritmo general del crecimiento económico; en el extremo opuesto, disminuyó en forma inversamente proporcional el radio de acción y el poder de decisión de la esfera político-estatal. El Estado cambió sus prioridades, abandonó en buena parte las políticas sociales y se dedicó a desarrollar las funciones que le permitían encarar los problemas y conflictos que surgían desde la sociedad, pero cuidándose de no entorpecer ni obstaculizar los procesos de acumulación de capital y la marcha general de la economía. Las políticas estatales de mediano plazo tendían a desaparecer y las que se creaban respondían, en su mayor parte, a la visión estratégica de los grandes grupos empresariales; en el corto plazo se orientaron especialmente por las señales del mercado. Uno de los mejores ejemplos de lo primero es lo que se ha dado en llamar la "teoría del derrame" o del "círculo virtuoso" que en el nuevo modelo se

creó entre el aumento de los beneficios, el aumento de la inversión, el aumento de la tasa de crecimiento, de los niveles de ocupación y del bienestar general de la población. Respecto de lo segundo, las “políticas de ajuste fiscal” son causadas generalmente por la persistencia de problemas estructurales resueltos, pero son justificadas por la necesidad de no inquietar, desalentar o desorientar a los mercados.

Cuarto, por esa causa los representantes de la voluntad popular fueron obviando sus orígenes y eventualmente el *mandato de las urnas* para transformarse en meros administradores de la cosa pública, tal como lo celebran los intelectuales neoliberales de la actualidad. Es necesario advertir, sin embargo, que los los políticos, representantes de distintos sectores de la ciudadanía, continúan reteniendo, todavía, una función de carácter esencial: mantener vigente el buen funcionamiento del sistema electoral y construir, por ese medio, cierto grado de consenso general acerca de la inevitabilidad y las virtudes de esta nueva sociedad con el apoyo de la recreación constante de lo que algunos autores denominan “la ilusión democrática” (Lefort, 1983 y Tarcus, 1995). Eso le permite resguardar determinado nivel de autonomía que no siempre es un atributo positivo. En la mayoría de las ocasiones, la construcción de un nuevo patrón de legitimidad tanto para este tipo de sociedad como para estas funciones del Estado se torna una tarea ardua, cuando no imposible, en la medida en que las virtudes proclamadas del régimen contrastan con las múltiples experiencias de decadencia social y de privación individual que experimentan los ciudadanos comunes cotidianamente. En esa contradicción se instala aquello que la mayoría de los analistas denomina la “crisis de la política y del sistema representativo”. También de ahí surge el problema central de nuestra reflexión: ¿cómo se construye consenso para la aceptación de un régimen que proclama eficiencia, racionalidad, progreso e igualdad de oportunidades y desarrolla una tendencia por ahora irrefrenable a la concentración de la propiedad y del poder, indisociables de la redistribución regresiva del ingreso y del aumento de la pobreza y la marginalidad social?; ¿qué papel juega en este nuevo fenómeno la adhesión casi incondicional al régimen democrático?

Quinto, este último momento se encuentra relacionado con la actual campaña de las fundaciones, de las consultoras, de las organizaciones empresariales, de todos los intelectuales neoliberales y de una buena parte de los funcionarios estatales por imponer lo que el Banco Mundial ha denominado “la segunda reforma del Estado”. Para este proyecto, el Estado no sólo debe adherirse permanentemente a los postulados de autonomía de los mercados, de despolitización de los problemas sociales y de desideologización de los problemas políticos, sino que debe autoneutralizarse para dejar ingresar nuevos criterios, saberes técnicos y formas organizativas creadas en el ámbito empresarial. Debe reformarse profundamente para pensar la producción de bienes sociales con los criterios de eficiencia y de beneficio propios de la producción mercantil y de la racionalidad empresarial. “En la reunión de la Asociación de Bancos Argentinos los banqueros que tomaron examen a los candidatos insisten con la necesidad de un nuevo ajuste fiscal y piden modelos de gestión privada para el Esta-

do”, dice una crónica periodística de la campaña electoral de mediados de año (Campanario, Datri y Borenstein, 1999).

Digamos, por último que en Argentina estos fenómenos de la subordinación-subsumción adquieren un carácter más relevante aún porque han sido agravados por la enorme influencia que en su desarrollo ha tenido, primero, la existencia de una enorme deuda externa, luego la situación de endeudamiento del país y, junto con ello, el proceso de concentración y, sobre todo, de extranjerización de las principales empresas económicas que hemos mencionado más arriba. En ese contexto, la subordinación de la política a la economía se transforma en casi total dependencia de las políticas del Estado a los intereses del capital financiero internacional y a las propuestas que sobre los aspectos neurálgicos de la organización de nuestra sociedad tratan de imponer los dos grandes organismos internacionales vinculados con el pago de la deuda. Ese dramático cambio de las relaciones de poder entre organismos financieros, empresarios, el Estado y las organizaciones sociales tiene una serie innumerable de manifestaciones, apenas exploradas. Una de expresiones más provocadoramente *realistas* en torno a este nuevo tipo de relaciones de poder fue lanzada por G. Calvo, economista argentino radicado en Estados Unidos, asesor del ministro de Economía y candidato él mismo a ministro en un posible gobierno de la Alianza, quien manifestó hace unos meses: “Soros es en la actualidad más importante que la Confederación General del Trabajo” (Nudler, 1999). Ya no se trata sólo de la *subordinación* de lo político a lo económico, sino de la *subsumción* de lo público en lo privado, de lo social en lo empresarial y de lo político en lo técnico-administrativo. Así, ha comenzado a construirse la nueva sociedad de mercado de capital financiero interno y externo.

Es bien sabido que a partir de la crisis de la deuda de 1984, el control sobre la política económica, la presión para promover las privatizaciones y la reforma de todas las funciones e instituciones del Estado por parte de la dupla FMI/Banco Mundial ha sido constante y, en ocasiones, totalmente insoportable, aun para los políticos y funcionarios que, como los de la presidencia Menem, coincidían con sus criterios o estaban dispuestos a complacerlos por pragmatismo o conveniencia (Minsburg, 1999; Petras, 1997). No disponemos todavía de un estudio sistemático de los contenidos de esas innumerables propuestas, de sus objetivos, del modo como manejaron su poder económico-financiero para realizar *chantajes* políticos ni de los mecanismos utilizados para ejercer presión y/o penetración institucional. En lugar de ello, se ha acumulado una cantidad y variedad de pruebas empíricas que resulta realmente abrumadora.

Esto explica, por otra parte, el nuevo carácter dominante que tienen las posiciones adoptadas por los funcionarios del área económica del Estado que han asumido el papel de *voceros intermediarios* de esos organismos. En ese sentido, resultan altamente ilustrativos los razonamientos elaborados por el anterior ministro de Economía, Roque Fernández, para imponer un nuevo ajuste fiscal en medio de la campaña electoral. También el contenido de la autocrítica posterior, cuando manifestó en varios reportajes públicos haberse arrepentido de autorizar, bajo la fuerte presión que ejerció una

importante movilización popular, un aumento mínimo del déficit fiscal para impedir una reducción del presupuesto educativo (Fernández Canedo y Velázquez, 1999).

En ambos se dirige a la sociedad mostrando cómo han *castigado los mercados* la indisciplina fiscal y qué peligros y amenazas acechan al futuro bienestar de los argentinos si los políticos aceptan reivindicaciones, legítimas pero imposibles de satisfacer, y vuelven a recaer en los viejos vicios populistas del pasado. En relación con ello, afirma un cronista de los sucesos económicos de esos días “[...] Sin embargo, en esta ocasión las circunstancias lo obligaron a llevar su estrategia hasta las últimas consecuencias: amenazó abiertamente con un golpe de los mercados, que podría frustrar los deseos de Menem de terminar su mandato en forma ordenada [...]” (Velázquez, 1999). Unos meses antes, el actual ministro de Economía del nuevo gobierno había manifestado en otro extenso reportaje: “[...] si se cambian las reglas del juego habrá golpe de mercado” (Machinea, 1999). Para ver la estrecha colaboración y distribución de tareas que se da entre los funcionarios internacionales y algunos estatales para asegurar la absoluta primacía de la economía en la toma de decisiones políticas se pueden observar los variados movimientos, *consultas* y presiones llevados a cabo por Ter Minassian, la representante del FMI en Buenos Aires, durante el mes de mayo de 2000, con el objeto de apoyar las propuestas del ministro de Economía y apuntalar su posición dentro del gabinete del presidente Menem (Bonelli, 1999).

LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO

El indudable empobrecimiento de ideas que sufrió la política en su proceso de subordinación respecto de la instancia económica generó una radical transformación de las estrategias de los partidos políticos en la disputa electoral. Sin embargo, la sustitución de la confrontación política por los pactos secretos y consensos blandos establecidos entre los principales protagonistas ¿significa realmente un vacío de la política como práctica social? Aunque la respuesta es compleja, con los elementos que tenemos a nuestra disposición estamos inclinados a afirmar lo contrario: la frivolidad del trabajo político electoral es parte de un nuevo proceso que tiene dos grandes componentes: de un lado es tributario de la privatización del trabajo político, y del otro el resultado de una nueva estrategia de ocultamiento del contenido de la política que toma la forma de pérdida, o que es presentado como tal, es decir, como un vacío. En efecto, la política no dejó de ocupar ni por un instante su tradicional papel estratégico en la fijación de metas y contenidos, pero esa política, basada en ideas, elaboradora de diagnósticos y proyectos, se convirtió en práctica de un solo sector de la sociedad; se elaboró en secreto y fue, además, privatizada. Lo que antes era parte de un bien público por excelencia se transformó en su contrario; lo contrario de lo público es lo privado y también lo secreto. Dicho proceso de privatización mantiene un alto grado de productividad y se apoya en una ideología generadora, el neoliberalismo, utilizado como marco de referencia para construir una estrategia de transformación social com-

pleja y exitosa: la *revolución conservadora*. Convocado para hacer un balance de la década menemista, el politólogo N. Botana decía en un reportaje reciente:

Ya es una ideología eso de creer en la supremacía de la economía sobre la política. Pero si hay algo de lo que estoy seguro es de que la política no se retiró durante la década menemista. Todo lo contrario. Yo creo que los grandes cambios que ocurrieron durante la década menemista [...] fueron guiados por la política. Hubo un designio explícito de hacer lo que se hizo en la Argentina (Roffo, 1999)

Ahora bien, esa ideología, esos significados, y sobre todo el enorme paquete de propuestas políticas específicas generados en nuestro medio, o tomados de alguno de los exitosos experimentos neoliberales realizados en el exterior, se hallan, por su contenido, en franca contradicción con los intereses, las necesidades, las pretensiones y las expectativas de la inmensa mayoría de la sociedad. Son, por lo tanto, inconfesables: no pueden generar un consenso electoral amplio ni aportar una base de legitimidad estatal más o menos permanente. Por eso, son presentados en sociedad por las nuevas *usinas* de ideas que son los organismos internacionales, las fundaciones, las grandes consultoras y los partidos políticos de derecha, fuertemente apoyados por la clase alta y media alta, pero que no llegan a reunir más de 10% del caudal electoral (Camou, 1999). Por ello, son elaborados en secreto por grupos privatizados, y escamoteados a la franca consideración de la opinión pública mayoritaria. Tampoco forman parte de los debates, por otra parte inexistentes, en torno a los posibles proyectos de país para el futuro, ni de las dramáticas pero inconsistentes confrontaciones acerca de la decadencia de las instituciones públicas.

Los encargados de realizar ese trabajo de ocultamiento, quienes encubren proyectos políticos antipopulares complejos a través de atractivas propuestas político-electorales, son precisamente las agrupaciones políticas y especialmente los dos grandes partidos tradicionales: los únicos que han sido capaces de convocar grandes mayorías electorales y alternarse en el ejercicio del poder democrático a lo largo de la historia del siglo XX. Ahora bien, lo novedoso de la forma como se van combinando los proyectos políticos poco populares, las prácticas electorales de los partidos mayoritarios y la estabilización de los procedimientos y de las instituciones de este tipo de democracia, es que esas estrategias se construyen mediante la frivolidad de las campañas, el escamoteo de proyectos y el vacío de ideas de las propuestas. Como no generan proyectos alternativos ni apoyan explícitamente el modelo neoliberal, elaboran un mensaje vacío, valga la paradoja, que descalifica a la política como práctica transformadora y elimina la capacidad de elaborar proyectos reparadores de las antiguas conquistas perdidas por los sectores populares. Por eso, más allá de las palabras y las promesas generalizadoras, esta estrategia parece moverse en una sola dirección: desorientar, desinformar, desmovilizar, generar escepticismo, impotencia y respeto sagrado al nuevo poder omnímodo e indestructible que detentan *los otros*.

El concepto de *crisis de la política* o *crisis del sistema político* proviene de distintos enfoques teóricos y temáticos y hace referencia a una multitud de fenómenos diversos. A

nosotros nos interesa detenernos en sólo uno de ellos: la profunda mutación que se ha operado en las instituciones, la ideología y la práctica de la representación política (Novaro, 1995). También nos interesa analizar las características de dos de sus principales derivaciones: de un lado, el proceso de aislamiento y autonomización de los *representantes políticos*, convertidos en una nueva capa social, autosubsistente, dotada de intereses propios, especializada en manejar los procedimientos electorales y las instituciones de la democracia; y, del otro, la consolidación de un proceso inverso de *desafección* respecto del valor moral y práctico de la política que afecta a los ciudadanos *representados*, es decir, a sectores cada vez más amplios de la sociedad (Paramio, 1993).

La forma de la representación política es uno de los rasgos que más influencia tienen en la definición del grado de profundidad que adquiere el sistema democrático. El alcance de los derechos a elegir y ser elegido, de los procedimientos para llevar a cabo esa función y especialmente de las características del pacto de delegación de poder entre ciudadanos y políticos que supone la representación, han sido, por esa razón, objeto de grandes disputas teóricas y de grandes conflictos político-institucionales, desde el inicio mismo del ciclo de la democracia moderna (Gargarella, 1995a). En un extremo se encuentra la concepción de la democracia directa, en el otro, la democracia delegativa; entre ambos, la democracia participativa (propuesta relativamente reciente y todavía no instrumentada) y, la que a nosotros nos interesa, la democracia representativa propiamente dicha, versión canonizada y adoptada tanto por los regímenes más antiguos, sólidos y estables del planeta, como por ese conjunto heterogéneo de experiencias contemporáneas del mundo periférico denominado *democracias en transición*.

Cuando se confrontan tanto las experiencias del pasado como esas concepciones canonizadas del sistema representativo propiamente dicho con las modalidades actuales de construcción del *pacto de delegación de poder* implícito pero imprescindible para su buen funcionamiento, surge la noción de *crisis de la representación*. En el pasado, el desarrollo de las sociedades capitalistas incluía crecimiento económico relativamente sostenido, ampliación del mercado de consumo y de trabajo, crecimiento y consolidación de clases sociales relativamente homogéneas, como parte integrante de un complejo movimiento político-cultural de integración creciente de los individuos y los grupos a la vida de la nación. Se multiplicaron y se fortalecieron las identidades colectivas tanto en lo relativo a su inserción económica como en la generación de estilos de vida y formas de producción simbólica claramente diferenciadas. La representación política se construyó a partir de grados relativamente altos de articulación entre los partidos políticos y esas identidades colectivas que, a través de un complejo proceso de interacción, realizaron el trabajo de lo que se ha denominado *agregación de demandas*: un complejo sistema interactivo que transformó en símbolos, rituales, ideas y proyectos políticos las aspiraciones más o menos difusas que surgieron en su seno. Por esa causa, el pacto implícito de delegación de poder que contenía la representación electoral se hallaba pleno de contenido; no era el producto exclusivo de una campaña electoral, era el punto de llegada de una larga historia de compenetración mutua entre los gru-

pos y los partidos y, a la vez, el comienzo de una fase superior por la cual el trabajo institucional del *representante* permitía establecer, generalmente, condiciones favorables para un posible pacto futuro (Garretón, 1997).

En nuestras democracias actuales ese vínculo se ha transformado, se ha desnaturalizado, se ha desvanecido o, en los casos más extremos, ha sido sencillamente eliminado. La calificación del grado de ruptura depende tanto del enfoque que se utiliza para el análisis como de los países o de los grupos internos que se toman como referencia (Lechner, 1996). La mayoría de los autores establece la siguiente correlación: la profunda contradicción actual entre crecimiento de la economía, de la circulación internacional del capital, de expansión del mercado de consumo, y la contracción tanto del mercado de trabajo como de los ingresos populares ha desbaratado las tendencias integradoras y homogeneizadoras de las fases anteriores del sistema capitalista. La sociedad ingresó en un periodo caracterizado por mutaciones sociales regresivas, empobrecimiento, marginalidad, exclusión, fragmentación social y, por lo que a nosotros más nos interesa, disolución de las clases sociales y de las identidades colectivas. La fragmentación y el aislamiento de los nuevos grupos sociales comienza produciendo dispersión de necesidades y multiplicación de reclamos, y finaliza diluyendo los sistemas de interacción que permitían la construcción de los mecanismos partidarios de agregación de demandas (Garretón, 1997).

Otros autores arriban a la misma conclusión tomando otro punto de partida: la crisis del Estado de bienestar conduce a la crisis de la democracia, y esta última se presenta como crisis del sistema político (Portantiero, 1993). Análisis aún más radicales relacionan la crisis directamente con la disolución del Estado-nación (Guéhnno, 1995). A las crecientes dificultades sociales para generar pactos genuinos de representación se agrega una gran variedad de factores político-culturales, entre los cuales prima el cambio sustancial de las antiguas formas de identificación simbólica, provocadas, de un lado, por el proceso de massmediatización de la política y, de otro, por la decadencia de los partidos políticos y de la participación política tradicional. La identificación partidaria supone, como su denominación lo indica, considerarse parte de un todo que contiene otras partes, representadas por otros partidos, generalmente en conflicto o en oposición. La transformación del ámbito político en escenario político generó un nuevo fenómeno de aislamiento individual, dispersión de intereses y búsqueda de un punto de referencia, una idea, una propuesta o un candidato, fuera de sí y también fuera de los otros que surge de la interpelación individual que la imagen de ese candidato lanza desde ese mismo escenario (Marramao, 1990). La *crisis* es, por tanto, un estado de transición producido por las respuestas inadecuadas que desde el ámbito de la política se han venido dando a los nuevos desafíos generados por la superposición de cambios sociales, crisis del Estado y contextos culturales.

La superación de la crisis es posible, y surgirá si la sociedad llega a ser capaz de construir un nuevo tipo de vínculo representativo y de *mandato no delegativo* relacionado con la construcción de un nuevo tipo de democracia deliberativa, semidirecta o plenamente participativa (Gargarella, 1995b; Portantiero, 1989; Laclau, 1990). Para

quienes no forman parte de esta última tendencia, la solución del problema no debe comenzar con la redefinición del sistema de representación, sino con el reconocimiento de que la política ya no ostenta la primacía de antaño ni el Estado es soberano y autónomo para intervenir en todos los aspectos de la vida social. La función principal de la política será construir una nueva racionalidad de *lo público* que se independice de la lógica del mercado y que también impida sus excesos y suplante sus limitaciones (Lechner, 1996). Cuando ello ocurra, será altamente probable que también desaparezcan sus tres principales consecuencias: el aislamiento/autonomización del elenco político, la manipulación mediática de los procedimientos electorales, y el proceso de desafección hacia la política por parte de la ciudadanía. Mientras tanto, deberemos aceptar que otras formas de representación más retrógradas, es decir, menos democráticas, tales como el mandato delegativo y el renacimiento de liderazgos personales ocupen los espacios vacíos que va dejando la disolución de las funciones anteriores.

Para nosotros, la denominada *crisis de representación* no es producto de una situación de transición, de retardo de los mecanismos de adaptación de las ideas y procedimientos de las políticas a las nuevas exigencias que plantean los grandes cambios societales, sino un proceso complejo y disimulado de adaptación perversa de la política al nuevo modelo de dominación que se está consolidando en la sociedad y que todavía no ha sido analizado críticamente. Pretendemos mostrar que comienza produciendo un fenómeno de doble aislamiento de la esfera de lo político, el cual combina autonomización de los elencos políticos con desafección política de la mayoría de la sociedad y termina expropiando de su propio poder político a los sectores populares; un poder o, mejor dicho, una capacidad de generar poder que éstos fueron acumulando durante una larga y zigzagueante historia de luchas y antagonismos.

El análisis del contenido y de la evolución de ese proceso en Argentina nos obliga a hacer, por lo menos, una somera referencia a la naturaleza de su régimen político actual, organizado alrededor del papel casi excluyente que ha desempeñado el sistema bipolar de partidos desde el inicio del periodo de transición democrática. En efecto, desde la segunda posguerra, han predominado sólo dos grandes agrupaciones de honda raigambre popular y con gran capacidad de convocatoria política y electoral. Sin embargo, a pesar del papel central que han desempeñado tanto en el pasado como durante este último lapso, son partidos estructuralmente débiles, incapaces de generar debates, definir grandes proyectos y proponer grandes iniciativas. Para compensar en parte esas limitaciones han explotado muy hábilmente su principal herencia: la capacidad de monopolizar la representación periódica de alguna de las dos grandes subculturas políticas en que se ha dividido tradicionalmente la mayor parte de nuestra sociedad (De Riz, 1993): una, defensora de los derechos civiles y políticos, la otra, identificada con la implantación y defensa de los derechos sociales, pero ambas mancomunadas en una misma concepción del progreso social que suma desarrollo económico, crecimiento del bienestar popular e incentivación de la movilidad social.

También han encontrado el modo de hacer surgir desde su propio seno líderes y liderazgos que con su imagen y su prédica han disimulado las grandes carencias de

sus organizaciones, apelando siempre a los contenidos más profundos de esas subculturas. Pero, si pretende convertirse en candidato, el líder debe satisfacer dos condiciones previas: puede apelar con éxito a los contenidos de alguna de esas subculturas si se ha consolidado previamente como *dirigente partidario*, como hombre de partido que logra construir su liderazgo nacional porque ha construido o está construyendo simultáneamente una de las bases fundamentales de su legitimidad y de su futura credibilidad, el liderazgo del propio partido. Para dar ese paso fundamental del partido hacia la nación, el líder debe hacer girar sus discursos de apelación alrededor de una o de algunas de las *cuestiones fundamentales* del momento, e integrar en un solo haz los valores, el estilo, los marcos de referencia de la subcultura y aun los rituales movilizados con la propuesta de satisfacción de las demandas prioritarias.

Para algunos autores, el crecimiento del pacto de representación delegativa que suponen estos liderazgos es uno de los síntomas más severos de la falta de consolidación del régimen democrático o de la crisis del sistema representativo. Nosotros pensamos que las otras formas de representación que se toman como punto de referencia para establecer comparaciones, en realidad, nunca existieron. Más allá de pequeñas diferencias no sustanciales, la forma central de representación que permitió arribar a la situación de relativa consolidación democrática en nuestro país fue construida con esta modalidad que podríamos denominar semidelegativa, tanto por su relación con una organización y una subcultura política, como por el compromiso, al menos discursivo, de solución de grandes cuestiones pendientes. En ese marco, la etapa actual de la crisis se relaciona muy estrechamente con la virtual ruptura de los políticos con esas subculturas del progreso y del bienestar popular, con la disolución de los liderazgos basados en la articulación de los elementos mencionados anteriormente y, causa de ello, con el desplazamiento de la función político-electoral hacia la estructura semiorgánica de partidos que ya no pueden disimular sus carencias históricas al poner en marcha los anteriores mecanismos de compensación. Vuelve a cambiar, de este modo, la modalidad de la representación: el pacto semidelegativo anterior es remplazado por una especie de contrato vacío donde predomina mucho más el componente delegativo y éste se combina con un nuevo sistema de comunicación de imágenes y de ideas fragmentadas y fugaces, en una especie de teatralización massmediática del debate y la propaganda política (Novaro, 1995).

Despojados de la cobertura artificial, pero sumamente eficiente, que les brindaron sucesivos liderazgos en el pasado, los partidos políticos de la actualidad ya no pueden disimular que no tienen propuestas, que han perdido la iniciativa política y que su intensa dinámica interna se halla sólo condicionada por las disputas entre grupos nacionales y/o regionales por ocupar espacios de poder y utilizarlos exclusivamente como medios de negociación en los interminables conciliábulos destinados a elaborar las listas de candidatos para las contiendas electorales. La profunda despolitización de esta confrontación permanente genera un proceso de selección natural que premia mucho mejor a quienes se transforman en expertos operadores, especializados en la manipulación de los procedimientos electorales intra y extrapartidarios, que a aque-

los otros que tratan de evitar los conciliábulos y pactos secretos y la privatización de las decisiones políticas significativas. El retorno, o la agudización, o la nueva transparencia que, por ausencia de liderazgos convocantes, adquieren ahora antiguas formas de reparto de cargos y de manipulación de los procedimientos electorales resultó, en la última campaña, realmente alarmante. “No dudo que la política es una verdadera mierda”, concluye en un reportaje periodístico un destacado intelectual, funcionario e importante precandidato en una elección interna del partido gobernante y, más adelante,

“[...] Porque si realmente uno le deja la política a los que creen que un voto vale diez mangos y dos paquetes de yerba mate [...] a los que piensan que cualquier medio es idóneo para alcanzar sus ambiciones, la política va a ser cada vez más mierda [...] se compraba un voto por diez pesos a la mañana y a medida que la elección se ponía cabeza a cabeza, fue aumentando la cotización: llegó a valer entre 30 y 40 pesos, más una bolsa de comida, a medida que se acercaba el cierre de los comicios (Almirón, 1999).

La reaparición de la misma cuestión en distintos lugares del país dio lugar a una larga serie de artículos, durante la campaña electoral.

Saber si la lista comandada por Cafiero consiguió minoría se convirtió en un misterio nacional [...] la interna abierta del P J en la provincia de Buenos Aires es la elección sin votos. En efecto: a una semana de los comicios justicialistas [...] todavía no hay ninguna certeza sobre los resultados que arrojó esa compulsión (Rios, 1999). La compra de votos tuvo su traspie en la localidad de Moreno [...] Un grupo de remiseros y votantes contratados por el menemismo incendió las oficinas de campaña luego de enterarse que no había llegado el dinero para financiar su trabajo en las internas (Jorquera, 1999). Tucumán, la goyesca. Las últimas elecciones tucumanas revelaron un escenario casi de circo, en el que el hombre común aún demanda democracia (Rosenzvaig, 1999). [...] El gobernador fue el primero en advertir sobre la posibilidad de fraude en las elecciones de ayer [...] a través] de una maniobra: el voto en cadena. Se trata de un sistema por el cual algunos partidos compran votos y garantizan que la persona que entró al cuarto oscuro efectivamente los vote [...] (Clarín, 1999).

El desplazamiento del militante por el operador multifuncional, manipulador de procesos electorales, se correspondió con la virtual supresión del papel convocante del dirigente partidario y su reemplazo por una nueva pléyade de encuestólogos, especialistas en imagen, estrategias de campaña, relacionadores públicos y técnicos massmediáticos, creadores del multifacético escenario audiovisual presentado durante la campaña. Entre todos montaron una serie abrumadora de espectáculos teledirigidos, *spots* publicitarios, programas especializados en la confrontación de eslóganes políticos superficiales, programas cómicos y de entretenimiento en medio de un clima farandulesco que parece haber hecho olvidar (¿definitivamente?) los actos, las manifestaciones y las demás formas de participación-identificación colectiva que caracterizaron por tantos años a las antiguas campañas políticas. “La política ya no es lo que era. Hoy por hoy, las encuestas son sagradas y la televisión el camino obligado, si no el único, hacia la gente. Sobre esas cuestiones se explayaron Julio Bárbaro y Alberto

Flamarique, operadores de Eduardo Duhalde y Carlos Alvarez” (Calderaro, 1999). Un tragicómico proceso revelador de ese nivel de superficialidad *técnica* con que se manejó la campaña, así como la mínima diferencia de propuestas que existió entre los principales competidores, surgió alrededor de la contratación de los dos asesores más importantes y caros de la campaña: cada uno de los candidatos se aseguró los servicios de uno de los dos grandes manipuladores massmediáticos estadounidenses responsables del último éxito electoral del presidente Clinton. Ninguno de los dos hablaba español, ni conocía los aspectos más importantes de la historia y de la problemática actual de la Argentina. “Los llaman consultores políticos. Pero en realidad son fabricantes de campañas políticas en lata, de enlatados electorales. Estados Unidos exporta sus servicios como exporta la Coca-Cola y los Mac Donald’s”, decía la corresponsal del diario *Clarín* en Washington analizando sus trayectorias (Barón, 1999).

Un sociólogo, especialista en medios de comunicación hacía el siguiente balance unos días antes del comicio: “Estas elecciones presidenciales son las más caras de la historia y las que acumularon mayor cantidad de asesores y encuestas [...] Pero también las que causaron menor movilización popular desde 1983 y por eso fueron las más mediáticas de nuestra historia [...] La campaña ha tomado un sesgo tan publicitario que dos de los avisos que registraron mayor impacto son ‘Dicen que soy aburrido’ y ‘Menem lo hizo’ e inspiraron varios avisos comerciales” (Quevedo, 1999). Una caracterización sumamente certera, que adquiere mayor relieve aún si la contrastamos con el relato, entre irónico y melancólico, de uno de los muy pocos actos políticos que se animó a organizar el comité de campaña del Partido Justicialista, como recurso extremo para retener el viejo voto partidario, elevar el *tono* de la campaña y revertir de ese modo la tendencia desfavorable que le venían indicando las encuestas desde mucho tiempo atrás, es la que realiza Bonasso (1999) en una nota titulada “La grisura de un día nada peronista” y que, entre otras cosas, dice:

Groucho Marx hubiera dicho: he visto actos inolvidables en mi vida, éste no es uno de ellos. Nada que destacar, ni mensaje, ni oratoria, ni fervor en las tribunas [...] sólo esa presencia constante de la lluvia [...] cayendo sobre el “pueblo peronista” convertido en pueblo-objeto. Una masa triste, marginal, mayoritariamente joven, oscura, femenina y desdentada. En rudo contraste con el sector de dirigentes [...] una pequeña burguesía (con movicom y camperas negras) que trepó en la época de la fiesta menemista, canta la marcha [peronista] y aplaude [...]

El análisis de los costos de una campaña tan pobre de ideas y tan pletórica de recursos técnicos nos muestra una faceta más de este acelerado proceso de perversión de la política. Según los cálculos presentados en distintos periódicos, el gasto total de la campaña electoral en todo el país no fue menor a los 100 millones de dólares, una cifra realmente extravagante si se tiene en cuenta que el país debió soportar durante ese mismo año los efectos de una aguda crisis económica y social. Pero además de la desaprensión que muestra operando de ese modo la clase política en su conjunto surge, inevitable, la pregunta ¿cómo se recaudó el dinero necesario para hacer frente a tal

nivel de gastos? Una cuestión que nos hace entrar de lleno al problema de la corrupción de las instituciones del Estado y de los miles de estratagemas que utilizan los aparatos y los grandes operadores para financiar ilegalmente las actividades de los partidos políticos; un tema relacionado directamente con la agudización de la crisis del sistema político pero que, por su gran complejidad, no podemos abordar en este trabajo. Sólo mencionaremos uno de sus rasgos más perversos, la relación entre la corrupción policial, el gran crecimiento de las actividades delictivas y el financiamiento de algunos partidos políticos en la provincia de Buenos Aires. Un cronista afirma:

[...] el trágico asesinato del Ramallo obliga a reflexionar sobre las formas más espurias de financiamiento de la política. Ex funcionarios del actual gobierno admiten que el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires ha utilizado a la policía para recaudar fondos [...] Pero también hay otras formas de financiamiento partidario que convierten al sistema político en relé, cuando no cómplice, de los intereses particulares (Verbitsky, 1999).

AISLAMIENTO SOCIAL Y AUTONOMÍA AUTORREFERENTE DE LOS ELENOS POLÍTICOS

Los elencos políticos no sólo unificaron sus discursos, sus métodos y sus objetivos, también construyeron un sistema específico de intereses económicos e institucionales compartidos. Por detrás de los discursos y de las imágenes que muestran ese nivel ínfimo de diferenciación y competencia, hay un proceso oscuro de colusión entre partido de gobierno y de oposición, y entre partido nacional y partidos provinciales al que adhieren, en muchas ocasiones, también los elencos de la mayor parte de los partidos menores con representación parlamentaria. En efecto, la ruptura del pacto de delegación de poder que es la causa de la crisis del sistema representativo produjo, en primer lugar, aislamiento del representante y distanciamiento del partido, luego el aislamiento fue transformando los anteriores vínculos que ligaban a éstos con su referente social en barreras infranqueables desde ambos lados. Vedado el acceso mutuo entre representados y representantes, unos cayeron en la desafección y los otros se volvieron autónomos y autorreferentes “[...] No es casual que los votantes desconcierten en las encuestas, porque hoy votan a uno y mañana al opuesto, casi al azar o bajo el influjo de las circunstancias, porque sienten que ninguno lo expresa ni lo representa de verdad” (Pasquini Durán, 1999b).

Se produjo, de ese modo, el previsible proceso de autonomización de intereses y objetivos que ha dado lugar, tan reiteradamente en el pasado, a la formación del espíritu de cuerpo corporativo. El espíritu corporativo se consolida cuando la experiencia compartida de convivir en un ámbito autónomo se transforma en necesidad común de asegurar su expansión o, por lo menos, de evitar su deterioro; y esa necesidad compartida establece nexos de identidad que se ubican por encima de las diferencias de papeles y de opiniones originales de sus miembros. Para explicar la naturaleza de los enfrentamientos provocados por el intento de obtener una segunda reelección presi-

dencial, poco tiempo antes de iniciar la campaña electoral, periodistas de diversa orientación se vieron obligados a referirse en forma lapidaria a diferentes aspectos de la misma cuestión. Reproducimos sólo algunos ejemplos:

La reelección plantea un divorcio entre el debate que agita a los políticos [...] y las necesidades concretas de la población [...] que percibe el debate político alejado de la realidad cotidiana que la angustia (Fraga, 1999). Una extraña maldición hace que nuestros políticos vivan fuera de órbita: mientras se agrava la situación del país en todos los frentes, chocan entre sí como si fueran asteroides, se pasan de bando como estrellas fugaces, Menem se resiste a declinar sobre el horizonte, y la oposición se ha conformado con vivir en el lado oscuro de la luna (Valiente Noailles, 1999).

Cuando la sobrevivencia del sistema y la carrera individual de sus principales protagonistas se vuelven prioritarios, subordinando todo lo demás, la corporación se vuelve autorreferente, se sale de quicio y comienza a girar en una órbita propia, totalmente insensible respecto de lo que ocurre alrededor o, mejor dicho, interpreta todo lo que ocurre a su alrededor (y también en su propio ámbito) según el esquema de valores y prioridades que le dictan las necesidades de su reproducción. Así lo describe, observándolo desde adentro, un ex ministro del presidente Alfonsín y miembro destacado del elenco:

[...] la trama no es de superficie, subyace a la realidad institucional. Opera por sistema de favores, refugios, negocios compartidos (ilícitos o no), vista gorda. Su dibujo, en fin, es el de una nueva corporación con intereses propios, anónimos para el resto de la sociedad. Cada quien, cada grupo se beneficia con la pertenencia: se promueve su carrera política, se afianza en su sindicato, facilita sus negocios. Es logia sin estatuto público. Su moral es moral corporativa no moral ciudadana[...] (Neri, 1999).

El trastorno de objetivos y la disolución de los marcos de referencia genera un ambiente endogámico totalmente artificial, una especie de caldo de cultivo donde florece una nueva subcultura y se despliega una serie compleja de destrezas, conductas, criterios y valores morales diferentes a las del resto de la sociedad que sólo pueden ser explicadas por la naturaleza de su entorno. Sólo en ese contexto puede hallarse una adecuada explicación de la cuestión largamente debatida de la corrupción personal e institucional. Las coimas, los retornos, la proliferación de *ñoquis*, los peajes, etc., se justifican, al comienzo, por la necesidad de financiar la actividad permanente de partidos políticos que ya no recurren al aporte de los militantes sino que están obligados a inflar los presupuestos contratando *operadores* técnicos y asesores. Cuando el financiamiento ilegal de la actividad partidaria es compartido por todos los grupos, como ocurrió, por ejemplo, durante muchísimos años en el Consejo Deliberante de la Capital Federal, se genera un clima de complicidad delictiva dentro del cual comienza a florecer el costado aún más perverso: el negocio, el negociado y la apropiación individual.

El político-representante forma parte de una especie en extinción y ya tiene un reemplazo que ha cambiado radicalmente sus objetivos y su marco de referencia; ya no procesa conflictos ni expresa necesidades, ahora administra un sistema, el sistema político autosubsistente que tiene dos funciones autónomas, es decir, preparar periódicamente el espectáculo electoral y renovar, en función de sus resultados, la composición del elenco gubernamental. Pero, dentro de ese sistema que sólo *representa* periódicamente un conflicto político-electoral totalmente insustancial, las posiciones son diferentes (ser miembro del gobierno no significa lo mismo que estar en la oposición), aunque los papeles tienden a volverse indiferenciados; están organizados por una misma concepción de la sociedad, de la política y de la sobrevivencia del propio sistema y racionalizados con un discurso prácticamente unificado. Por ello, es difícil resistir a la tentación de pensarlos como una especie de clase autónoma, autosubsistente, dotada de objetivos independientes y especializada en la obtención y administración del poder político. En todo caso, va en camino de transformarse en una nueva fracción de la clase dominante argentina, encargada de acumular y concentrar el ejercicio del poder político estatal, a través de procedimientos electorales, así como otras fracciones acumulan riquezas, capital u otras formas de poder social. Parecería que todo está organizado para hacer converger en un mismo ámbito social nuevo a quienes tienen capacidad de acumular poder político-electoral (dirigentes de partidos), poder social (dirigentes de corporaciones empresariales y no empresariales), poder económico (viejos y especialmente nuevos empresarios), y poder del conocimiento, es decir, el saber técnico imprescindible para diseñar y ejecutar políticas institucionales (las distintas versiones de la tecnocracia, especializada en programas de ingeniería institucional).

LA DESAFECCIÓN POLÍTICA

El proceso de aislamiento-autonomía-autorreferencia del sistema político comienza en el momento en que los grandes partidos mayoritarios advierten que para poder sobrevivir sin cambiar, respetando el orden instituido por el nuevo poder del capital a escala universal, es necesario adherirse al *pensamiento único*, junto con ello, aceptar la brutal reducción del papel que deben desempeñar la política y el Estado en la regulación de las relaciones sociales. Se consolida cuando logra generalizar un fenómeno inverso pero complementario: la *desafección política*, es decir, la disolución de todo vínculo sustantivo no sólo entre los ciudadanos y los partidos sino entre la sociedad y la política.

Impulsa, de ese modo, una tendencia que conjuga la alta concentración de poder político para una estrecha minoría que controla y manipula la instituciones político-estatales, y una dispersión-disolución de ese mismo atributo en la inmensa mayoría de la sociedad. La dupla concentración-dispersión del poder institucional reproduce, en su propio ámbito, las características del proceso de concentración-polarización-segmentación que ha ido definiendo la evolución de la economía, la sociedad y la produc-

ción simbólica en Argentina durante los últimos 20 años. También se basa, como veremos más adelante, en un oscuro proceso de expropiación-apropiación-redistribución de recursos simbólicos y político-institucionales equivalente al que ha venido ocurriendo durante el periodo de transición democrática y, especialmente, durante la década de la *revolución conservadora*.

La desafección política reconoce una variedad de causas identificadas pero escasamente estudiadas todavía y una importante constelación de efectos sobre la percepción, la toma de conciencia y la conducta político-electoral de la sociedad, aún menos conocida. En función de nuestro objetivo, haremos una somera referencia a dos de sus componentes principales: el *desinterés* y la *desafección* propiamente dicha (Paramio, 1993). La noción de *desinterés* hace referencia a la primera instancia lógica y también empírica de la secuencia que conduce a la *desafección*. Es la primera reacción de distanciamiento respecto del partido de referencia, primero, y a la constelación de partidos, después, que forman parte del sistema de competencia propio del juego electoral de la democracia. El ciudadano desinteresado considera a la oferta electoral irrelevante, compuesta por proposiciones generalmente indiferenciadas que en algunos casos omite dar respuesta, en otros casos tergiversa los términos y, en el resto, oculta deliberadamente la existencia de los grandes problemas que interesan a la gente. Los políticos son para él cínicos y *aprovechadores* o, en el mejor de los casos, inútiles e impotentes para representar políticamente los intereses de quienes dicen representar. Para él, los partidos han perdido sus marcos de referencia social, se han transformado en empresas, en aparatos profesionales que no requieren participación ni militancia, sólo recursos económicos para decidir, con procedimientos muchas veces discrecionales, el reparto de cargos electivos y para armar con técnicos especializados el *carnaval electoral* que la subsistencia de la democracia requiere periódicamente.

Un estudio de campo, realizado a comienzos de 1999, confirma empíricamente la percepción que de estas cuestiones ya habían elaborado, antes del inicio de la campaña electoral, los votantes potenciales de la ciudad de Buenos Aires, una de la regiones más altamente politizadas y con mayor nivel de participación del país. En efecto, antes de que comenzara la confrontación de propuestas entre los nuevos candidatos, sólo 4% de los encuestados creía que los políticos tenían disposición de cumplir con las promesas electorales; de los restantes, 72% estaba convencido de que ya nadie se hacía cargo de sus propios dichos y que sólo eran utilizados para montar un escenario de disimulo y, dentro de él, ganar las elecciones. Casi 75% de los encuestados que admitió no haber participado de ninguna actividad organizada en algún partido, sea del signo que fuere, define un rasgo característico, acentuado muy fuertemente entre los jóvenes: 82% de los que tienen entre 26 y 31 años manifestó haber votado en todas las ocasiones, pero sin haber tenido nunca ningún contacto con grupos o partidos políticos. De las cifras se deduce, además, que el nivel de información es sumamente bajo y que sólo 6% de los encuestados de más de 18 años se ha relacionado activamente con alguno de los partidos. Lo dramático de las tendencias que revelan los datos en conjunto obliga a los investigadores a sacar la siguiente conclusión: “[...] de no mediar una

reversión en el corto plazo, en el término de dos décadas, el sistema de partidos en la Argentina podría convertirse en un verdadero esquema formal carente de contenido social, vacío de participación y absolutamente inoperante en términos políticos” (Braslavsky, 1999).

A pesar de todo, la conclusión es optimista: considera que de no mediar cambios sustanciales el vacío del sistema político adquiriría forma definitiva dentro de 20 años. En realidad, la experiencia recogida durante la última campaña nos indica que se han acelerado los tiempos, la ruptura de los vínculos entre los partidos políticos y la gente se halla plenamente consolidada y parece marcar ya una tendencia prácticamente irreversible.

Precisamente, la convicción de que el sistema ya no puede ser regenerado marca el paso del *desinterés* respecto de la política, representada por el sistema de partidos, a la *desafección* respecto de la naturaleza misma de la política, entendida como instrumento de viabilización de cambios, a partir del ejercicio de la soberanía popular. Si la relación entre la política y el ejercicio de la soberanía popular se vuelve ritual y formal, su significado se desvanece; ya no sirve para interpretar y dotar de unidad de sentido a los movimientos de distinto tipo fragmentarios, dispersos y superpuestos que aparecen en la sociedad. Tampoco sirve como instrumento de integración simbólica de clases y grupos sociales, un mecanismo que por definición es parcial y puede volverse faccioso, pero que forma parte de una extensa red de relaciones de lucha y complementación con otras parcialidades dentro de una unidad, la nación, que las contiene a todas. Ya no puede definir los contenidos del *interés general* ni dotar de legitimidad a un Estado que ha perdido, junto con ella, su posición dominante para promover el bienestar general, la integración simbólica y la proyección futura de la sociedad. Por esa razón, la *desafección* es un estado de despojo, de pérdida de la capacidad de descubrir significados y construir interpretaciones, entre las cuales se destaca nítidamente la incapacidad de comprender su propio origen, es decir, la naturaleza de los hechos que la han producido. Es, también, un estado de indefensión porque deja inerme a quien lo sufre, desprotegido y sin la posibilidad de elaborar respuestas propias ni confrontar la interpretación que de esa *desafección* hacen los otros, los que no se hallan involucrados.

Es una reacción compleja que parece surgir en regiones profundas de la conciencia y no se expresa como tal sino a través de otro tipo de conducta y de opiniones: lo que se menciona como desinterés es desentendimiento, un esfuerzo infructuoso por dejar de hacerse cargo del destino de aquello que se ha perdido y no podrá ser recuperado; como rechazo unilateral, improductivo y desesperanzado. “Ya no somos el pueblo —dice J. P. Feinman (1999)— ahora somos la gente. No somos participativos. Somos aisladas subjetividades temerosas. La gente no se reúne, no quiere saber, no es solidaria. No hace la historia, la padece. La gente no hace nada, se queda en su casa y mira la tele interminablemente[...]”. O.Landi (1999) reflexiona, mientras analiza el curso de la campaña electoral

Me temo que por debajo del puente que tiende la elección entre los candidatos y los votantes pasa otro tipo de corriente fría [...] se trata de la extensión de una duda que

ronda en el sentido común de mucha gente: ¿puede la política cambiar significativamente mi realidad? [...] se sospecha que la política convencional se ha quedado con pocos instrumentos de intervención sobre las circunstancias cotidianas del hombre común [...] se trata, en suma, de una especie de lógica de la época y de la ambigüedad de la democracia que cuando más consolidada está, más se *fundamenta en rutinas y en mejoras de gestión y menos en actos que sacudan la escena política.*

Pero ese deslizamiento del *desinterés* hacia la *desafección* que prima en la actualidad ¿es ineludible?; el extrañamiento ¿es la única forma de adaptación posible a la nueva lógica del despojo que se halla inscrita, como dijimos, en los cambios ocurridos en todos los ámbitos sociales?; ¿es un fenómeno natural, irresistible, impuesto sólo por las nuevas tendencias que priman en el mundo o es un hecho inducido, es decir, producido deliberadamente entre nosotros por quienes pretenden transformar esas tendencias en hechos consumados e irreversibles?; ¿es un nuevo signo de la época o el resultado final de una larga lucha social destinada a dirimir, precisamente, esa cuestión?, ¿o es ambas cosas a la vez? En cualquier caso, ¿cuáles son los factores objetivos y subjetivos que impiden transmutar *desafección* por intento de reconstitución de la política?

Algunos autores plantean que lo que se observa como *desafección* respecto de la política es cierta pero no definitiva, se parece más bien a una conducta reactiva y transitoria que provoca la percepción de un cambio radical, que se intuye definitivo, porque no resulta comprensible todavía: el estrechamiento del papel de la política, del Estado y de la propia democracia que ha impuesto la globalización y la nueva sociedad de mercado. Lechner (1995) afirma: “Cambian los objetivos de la política. La decisión de metas y tareas del desarrollo social deja de formar parte del campo de competencia de la política [...] que ya no es conducción sino regulación de los procesos sociales. El a veces abusivo primado de la política de antaño se encuentra ahora acotado por los equilibrios macroeconómicos”. Pero, aunque las viejas funciones de la política han desaparecido, la sociedad no genera, ni pretende generar nada a cambio. El desquicio de lo político se transforma en una privación, un despojo de algo que los más débiles podían obtener en cuotas no siempre suficientes pero imprescindibles de seguridad, protección, certidumbre frente al futuro. El ciudadano, abrumado, comienza renegando de los partidos políticos y termina abominando o despreciando a la política.

De lo anterior podemos extraer dos corolarios. Primero, el ciudadano se reconciliará con la política el día que reconozca que ella sólo servirá en el futuro para lograr metas mucho más modestas, tales como el mantenimiento del orden y el recambio de los elencos gubernamentales. Segundo, el ciudadano se reconciliará con la política cuando descubra que la satisfacción de las necesidades permanentes que ya no canaliza la política podrían ser procesadas en otros ámbitos sociales poniendo en marcha otros tipos de mecanismos e instituciones. Para la concepción neoliberal, ese ámbito es el mercado, para los demócratas liberales es un nuevo tipo de espacio público de carácter intermediado entre la sociedad y el Estado en el que se generará la lucha futura por la extensión de los derechos de ciudadanía.

Nosotros, en cambio, quisiéramos culminar nuestra reflexión introduciendo una hipótesis diferente: el contenido principal de aquello que denominamos política en la

actualidad es, en realidad, una estratagema complicada destinada a garantizar que la percepción de la disolución del pacto delegativo por parte de quienes ya no se sienten representados derive hacia la desafección política y no hacia la búsqueda de nuevos pactos o simplemente hacia la rebeldía, es decir, hacia la definición de una clase de pactos diferentes.

Por ello, lo que se nos presenta como crisis del sistema representativo es también un disimulo, un modo de justificar el contenido de dicha no-representación y un modo de ocultar que la no-representación es parte esencial de un complejo y multifacético operativo cotidiano destinado a deslindar dos campos de acción que en el pasado y en la memoria de la gente marcharon siempre unidos: la política como medio para obtener justicia social, es decir, para satisfacer los reclamos y expectativas de la parte más desprotegida de la sociedad, y la política como procedimiento de selección de los elencos y de organización de las instituciones gubernamentales.

La política no está en crisis, ha cambiado de función y de contenido. En lugar de unificar, proyectar y resignificar la lucha social, jerarquizándola, volviéndola inteligible e instalándola en un escenario privilegiado, busca inhibirla con lo cual produce impotencia en los sectores populares por varios caminos: *a)* la aceptación resignada de la expropiación política a que han sido sometidos; *b)* el desaliento, la pérdida de energía e imaginación para intentar reconstruir viejos lazos, objetivos y estrategias y/o para proponer nuevas soluciones a los nuevos y muy grandes desafíos que le propone esta radical transformación del modo de dominación social que estamos transitando; *c)* la aceptación de que la democracia es sólo el mejor procedimiento para seleccionar el mejor elenco gubernamental; *d)* el reconocimiento de que estos nuevos elencos ya no están obligados a formular ni a respetar promesa electoral alguna o, aún peor, *e)* la verificación pasiva de que su escasa iniciativa política se halla totalmente subordinada a las exigencias de quienes detentan el verdadero poder, los técnicos intermediarios de organismos externos y corporaciones, administradores tan autónomos y autorreferentes como el propio sistema político y los ejecutivos racionalizadores, especialistas en ingeniería institucional.

Si lo anterior es verdadero, estaríamos en presencia de una nueva modalidad, sumamente eficiente, de generar consenso por omisión, por resignación, por impotencia y, en suma, por inanición hacia un nuevo modelo de dominación social. Un modelo que, en oposición a sus predecesores, requiere para su buen funcionamiento, excluir la otra forma de la política, es decir, la percepción de intereses específicos, la participación, la movilización, la reivindicación y el reclamo. En ese contexto, el nuevo sistema hegemónico se construye de un modo diferente, con estabilidad política, con consolidación del sistema democrático, con la virtual eliminación de la violencia política, pero a un solo y muy alto precio: el incremento hasta niveles inimaginables de múltiples formas de violencia social reconocida pero, a la vez, negada políticamente; declarada problema insoluble o problema a resolver en el largo plazo a través de la dinámica espontánea e incontrolada del mercado.

De esta manera, el mensaje multifacético de la impotencia pasa a desempeñar un papel estratégico presentado insistentemente como impotencia de sí mismo, como ausencia de recursos para hacer lo que se quisiera hacer, o lo que se debiera hacer, para resolver problemas endémicos de la sociedad y la economía. “Quisiera pero no es posible” o, lo que es lo mismo, “no quiero pero estoy obligado por las circunstancias”, y también unificando las dos formulaciones “quisiera hacer lo que es justo y atender a los reclamos de la gente pero no puedo porque estoy obligado indefectiblemente a respetar las imposiciones de otro poder, el poder de una estrecha minoría que no es aceptado por ser minoría poderosa sino porque de ella depende exclusivamente la marcha de la economía, única fuente en definitiva de resolución más equitativa de las diferencias sociales”. Una lógica inédita de la indefectibilidad, basada en el traslado de toda, de absolutamente toda, la capacidad de modelar el destino propio y ajeno a una nueva generación de poderes indefinidos, omnímodos y misteriosos, es decir, no identificables, que marcan el rumbo de nuestro universo y se expresan a través de sus intermediarios, nuestros temibles interlocutores. Este reconocimiento, no siempre explícito, es pavoroso y alimenta un modo generalizado de concebir el alcance y la función de la política en el momento actual: *el posibilismo*, el cual se fundamenta en una mezcla de proporciones cambiantes entre cinismo (para justificar la subordinación inevitable al poder de los otros) y pragmatismo (renuncia a todo propósito que amenace con trascender esos límites) que alimenta cotidianamente, de un lado, el distanciamiento respecto de la gente y, de otro, la transformación de eso mismo en autonomía autorreferente.

LA DEMOCRACIA CONSOLIDADA: DE LA IMPOTENCIA A LA COMPLICIDAD

Con la democracia consolidada, la sociedad argentina ha logrado recuperar las libertades públicas y erradicar uno de sus más grandes problemas endémicos, la violencia política y la persecución ideológica. Tenemos ahora una democracia no represiva, respetuosa de los derechos políticos individuales, garantía del cumplimiento de las normas, procedimientos y plazos electorales y, también, de un aceptable funcionamiento de las instituciones republicanas, más allá de las formas impunes de avasallamiento e instrumentación que surgen de su carácter semidelegativo y de su vinculación con un gobierno presidencialista y un Estado patrimonialista. Es una democracia tolerante y pacífica que se contrapone, en cambio, con el alarmante crecimiento de los niveles de violencia social que ha generado, directamente en los damnificados e, indirectamente, en el resto de la sociedad, la distribución regresiva del ingreso, el empobrecimiento, la desocupación, la movilidad descendente, la degradación de la educación, la salud y la seguridad personal, el crecimiento de la marginalidad, de la exclusión, etc. Una violencia producida por despojo que no se basa en persecución institucional o policial, ni se inscribe directamente en los cuerpos policíacos, pero que está teniendo efectos igualmente devastadores.

El problema que requiere explicación, en medio de esta flagrante contradicción entre evolución de la política e involución de la sociedad es, por tanto, el siguiente: ¿qué características tiene este tipo de sociedad democrática, capaz de producir una agudización tan pronunciada de las desigualdades sociales y una acumulación tan abrumadora de violencia social sin que ello se traslade en forma significativa al plano de la política?

Para la mayoría de los analistas políticos, generalmente adscritos a la versión actualizada de la teoría de la ciudadanía, la relación parece ser sólo contingente: aunque ambas tendencias son contiguas, se desarrollan paralelamente, responden a causas diferentes y relativamente independientes. En todo caso, se acusa a la política democrática de ser, nuevamente, autorreferente y de no atreverse a intervenir efectivamente para tratar de modificar aquello que no ha creado, que le ha sido impuesto por el mercado a pesar suyo: revertir, o al menos amortiguar, los efectos más perniciosos del proceso de regresión social. Para ello, pretenden generar una nueva situación de compromiso que reconstituya los canales de comunicación entre lo social y lo político basado, como indicamos más arriba, en la generación de un nuevo contrato representativo o en la creación de nuevas formas de representación. Advierten, además, que si no supera su estado actual de indefectibilidad, la democracia tendrá un incierto futuro y se convertirá en su propia víctima, ya sea porque la violencia social se exprese en el plano político por medios no democráticos o semidemocráticos, o porque la agudización de la incongruencia entre derechos políticos adquiridos y derechos ciudadanos perdidos terminará diluyendo las posibilidades efectivas de participar plenamente, y excluirá, de hecho, a una gran parte de la población.

Nosotros pensamos que esa visión del papel que ha (o que no ha) desempeñado la política democrática en la fuerte aceleración del proceso de regresión social, durante el periodo de transición es errónea y, por lo menos, complaciente. No advierte la relevancia que en ello han tenido varias cuestiones importantes. Primero, las decisiones estratégicas que originaron el endeudamiento externo, la sustancial modificación del modelo económico y, su consecuencia, el proceso de regresión social, fueron decisiones políticas tomadas en el Estado, diseñadas por organismos internacionales, ejecutadas por funcionarios especializados, pero avaladas por un gran acuerdo que fue incluyendo en muy poco tiempo tanto a los partidos mayoritarios como a los principales dirigentes y a los representantes políticos elegidos democráticamente. Segundo, ese mismo acuerdo es lo que ha redefinido a la actividad política como administración de disposiciones que garanticen la permanencia de *los grandes equilibrios macroeconómicos*, es decir del sistema de intereses construido y consolidado durante la década de la *revolución conservadora*. Tercero, para ello pudo construir un escenario aislado, con grupos de representantes que se renuevan pacíficamente sin tener necesidad de asumir *compromisos* electorales porque han podido eliminar la política de la administración de las instituciones democráticas mediante el discurso y la práctica del posibilismo y la impotencia. Cuarto, a ese compromiso y a ese discurso de la impotencia se le ha sumado, últimamente, la amenaza de la ingobernabilidad y el *chantaje* democráticos. Para finalizar veamos, de esto último, un solo ejemplo.

Los datos de la encuesta de opinión en torno al sistema electoral y el papel de los partidos políticos y los candidatos que analizamos más arriba dejó claramente expuesta una contradicción, posteriormente ampliada y ratificada por estudios cualitativos y entrevistas periodísticas, publicadas a lo largo de la campaña (Franco y Heller, 1999; Thieberger y Braslavsky, 1999). Las mismas personas que manifestaron no tener información ni ningún tipo de participación política, rechazan las actividades de esa especie y, sobre todo, no creen las promesas electorales. Sin embargo, las dos terceras partes de ese grupo de *desinteresados* también considera que la competencia por cargos de gobierno a través del sistema de partidos es positiva para el país porque representan a diversos sectores de la sociedad, son la garantía del sistema democrático, o limitan el poder de los gobernantes. Se construye, de ese modo, una nueva concepción que escinde a la política tradicional entendida principalmente como canal de expresión de demandas y resolución de conflictos de la política electoral actual, vista como fuente de recreación y legitimación del régimen democrático.

Los testimonios recogidos especialmente entre los votantes más jóvenes pueden ser leídos y agrupados alrededor de los siguientes argumentos: “la política dejó de ser”, “ya no me interesa (o nunca me interesó)”, o “la política me perjudica”, o bien, “soy neutral con respecto a la política”, “la política no es una dimensión significativa de la vida social” y, muchas veces, “es una actividad perjudicial porque alberga una especie de oligarquía que sólo se mueve en un clima de corrupción e impunidad”. Por tanto, la política es algo inocuo, algo neutro o algo perjudicial. Pero, a la vez, estos *desafectados* de la política tienen una noción muy clara de las diferencias existentes entre la política y la democracia. La democracia aparentemente es otra cosa: es el sistema de convivencia que debemos mantener, es un modo de vivir en orden y libertad, con garantías de seguridad (aunque sean cada vez menores) y derecho de apelación. Por lo tanto, la falta de credibilidad respecto de la política se contrapone con una clara identificación con la democracia que explica la abierta decisión de participar en la competencia electoral, aunque de ella no surja nada más que un recambio de los actores gubernamentales.

Este modo de encarar la cuestión soslaya el problema del aislamiento y de la crisis de representatividad del sistema político, pero crea una contradicción que genera un equilibrio transitorio y muy inestable. Sólo las explicaciones aportadas por la *teoría procedimentalista-pluralista* puede concebir la vida en democracia sin una fuerte presencia de la actividad política. Pero, aun así, queda pendiente por resolver una cuestión muy importante: ¿cómo se van a canalizar los innumerables conflictos, por ahora potenciales, que va generando a su paso el ininterrumpido aumento de la violencia social si no es a través de los movimientos sociales y de los partidos políticos? Si los políticos que actúan en una democracia no integran la perspectiva posibilista y administrativista que han adoptado, con una radical transformación de los pactos delegativos que los unían con la gente, la política, es decir, la canalización de demandas, conflictos y proyectos surgidos en el seno de la sociedad se realizará por otros medios, tal como está ocurriendo en diversos países de nuestro continente.

Independientemente de la visión que cada cual ha elaborado de la política, los ciudadanos que tienen voz, que todavía no corren el riesgo de volverse invisibles, se hallan comprometidos con la democracia porque defienden de ese modo la posibilidad de continuar conviviendo pacíficamente. En efecto, si se la vacía de contenidos políticos sustantivos, nadie cuestiona ni confronta a este régimen democrático, como en el pasado, porque ningún conflicto es lo suficientemente violento como para colocarla ante sus propios límites. O, dicho de otro modo, porque ha aprendido a absorber inteligentemente los conflictos sociales tenues y fugaces que se sucedieron durante la última década. Por consiguiente, ¿la democracia es pacífica, estable y relativamente previsible por sus propias virtudes o porque todavía no ha llegado el momento en que la parte *invisible* de la sociedad, es decir, los empobrecidos, marginales y excluidos, la ponga a prueba, enfrentándola a su vacío y a sus propias carencias? Pero ¿es realmente posible que llegue ese momento en que la violencia se transforme en conflicto y éste en disputa política?

Si ese momento no está próximo se debe, entre otras cosas, a la generación de una serie de reflejos defensivos eficaces que han logrado invertir la secuencia de ese proceso: ahora es la democracia quien logra poner frenos al conflicto social y a la disputa política a través de la amenaza y el chantaje. La actuación y la transmisión de la ideología *posibilista* reduce, como señalamos más arriba, los horizontes y produce impotencia; la amenaza de caos social y de ingobernabilidad es una especie de extorsión que se complementa con aquélla generando pánico e inanición. Veamos cómo se hace perder la amenaza y se la transforma en *chantaje*, utilizando un último ejemplo de la pasada campaña electoral.

Al promediar la campaña, el candidato del partido oficialista trató de diferenciarse de la ya poco popular figura presidencial al elaborar un discurso considerablemente crítico de la gestión neoliberal defendida cerradamente por todos los actores gubernamentales. Difundió un discurso poco convincente pero muy presentable; aunque todo el mundo convenía en que se trataba de una crítica hipócrita, incapaz de convertirse en un programa efectivo de gobierno, lo consideraba adecuado para ocupar un espacio vacío, abandonado previamente por la oposición en el escenario de la representación electoral. En el marco de esta estrategia de crítica discursiva intentó introducir en el debate el tema de la relación entre crisis fiscal, crisis de la balanza de pagos y agudización del *endeudamiento* y produjo una conmoción generalizada, un verdadero escándalo. Lo notable del acontecimiento no reside, empero, en el contenido de la confrontación de posiciones respecto de la cuestión, sino en lo contrario, en la proliferación de argumentos diferentes elaborados con un mismo fin: demostrar que el debate mismo era impropio porque el pago puntual y escrupuloso de la deuda era parte de un compromiso ya contraído con nuestros deudores y que su sola mención, dentro de un hipotético plan de política económica, podría agudizar los desequilibrios macroeconómicos ya existentes y generar un clima fatal de desconfianza e inestabilidad en los mercados (entre otros, Eichelbaum, 1999).

Pero, en esos esquemas argumentales, la amenaza no se hace provenir del riesgo de boicot internacional o de enfrentamientos con los grandes bancos y organismos inter-

nacionales afines sino en la estrecha vinculación que se establece entre la aparición de esas nuevas dificultades económicas y el resurgimiento de *la ingobernabilidad*. La versión original, conservadora, de la teoría de la ingobernabilidad partía de un supuesto: la imposibilidad de satisfacer el crecimiento explosivo de las demandas de los sectores populares por parte de los gobiernos democráticos creaba un vacío, una situación de descontrol que podía conducir a la exacerbación de los conflictos sociales, al debilitamiento de las instituciones del Estado o ambas cosas a la vez. En el inicio, se verificaba una preocupante exacerbación de los proyectos populistas y al final de ese camino aparecía la verdadera amenaza, la insurrección, la construcción de un nuevo tipo de poder político y la instauración del socialismo.

En la versión actual, la amenaza de ingobernabilidad aparece vinculada a procesos opuestos, es decir, a las estrategias de inversión del capital y a la desorganización de los mercados. Si nos desvinculamos de los mercados, si se retira el capital de nuestra plaza financiera y se agudiza la inseguridad y la marcha irregular de la economía —dicen— se crearán nuevos tipos de círculos viciosos que agravarán aún más los problemas sociales ya existentes y éstos desborden la capacidad de solución de las instituciones, privadas o del Estado. Una de las experiencias colectivas que mejor se amolda a esta interpretación es, sin duda, la compleja conexión subterránea, intuitiva por la gente, entre desocupación, pobreza, marginalidad y explosivo crecimiento cuantitativo y cualitativo de la violencia delictiva. *La ingobernabilidad* no surge, entonces, como antaño, ni de la agudización del conflicto político, ni del crecimiento de las luchas sociales; proviene, estrictamente, del grado de coerción que puede ejercer indirectamente sobre el conjunto de la sociedad y de las instituciones políticas la dinámica del capital. Los límites del proyecto y del conflicto político los ponen los *representantes* del capital por distintos medios, entre los cuales debe incluirse, en un lugar destacado, a la complicidad asumida por el régimen democrático a través de la periódica amenaza de *ingobernabilidad*.

BIBLIOGRAFÍA

Abraham, T., 1999, *La empresa de vivir*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

Aliberti, E., 1999 a, "Realidad y fantasía", en diario *Página 12* del 16 de agosto.

Aliberti, E., 1999b, "Cuales elecciones", en diario *Página 12* del 16 de agosto.

Almirón, F., 1999, "Reportaje a Mario Pacho O'Donnell", en diario *Página 12* del 16 de abril.

Altamirano, C. *et al.*, 1998, "Debates sobre política e ideas", en revista *Punto de Vista*, diciembre.

Altamirano, C. *et al.*, 1999, "Debates sobre la transición", en revista *Punto de Vista*, núm. 69, diciembre.

- Barón, A., 1999, "Secretos de una campaña carnal", en diario *Clarín* del 16 de mayo.
- Beck, U., 1998, *¿Qué es la globalización?*, Editorial Paidós, Buenos Aires.
- Bonasso, M., 1999, "La grisura de un día nada peronista", en diario *Página 12* del 26 de julio.
- Bonelli, N., 1999, Columna en diario *Clarín* del 17 junio.
- Botana, N., 1995, "Las transformaciones institucionales en los años del menemismo", en revista *Sociedad*, núm. 6.
- Braslavsky, G., 1999, "Nadie cree en promesas", en diario *Clarín* del 24 de enero.
- Bruschtein, L., 1999, "Reportaje a Alberto Piccinini", en diario *Página 12* del 11 de octubre.
- Calderaro, R., 1999, "Encuestas conducción", en diario *Página 12* del 15 mayo.
- Camou, A., 1999, "Los consejeros de Menem...", en revista *Cuadernos del CISH*, núm. 5, Montevideo.
- Campanario, S., D. Datri y S. Borenstein, 1999, "Agenda empresarial para la transición", Suplemento Económico de *Clarín* del 11 de julio.
- Cheresky, I., (1998), "Contra el consenso blando, el desafío de la política", en revista *Punto de Vista*, núm. 61.
- Cheresky, I., "El mensaje de las urnas", en revista *Punto de Vista*, núm. 69, diciembre.
- Clarín*, "Fantasma de fraude en la elección de Tucumán", Crónica del enviado especial del 7 de junio.
- Cufre, D., 2000, "Reportaje a Pablo Guerchunoff", en diario *Página 12* del 26 de enero.
- De Riz, L., 1993, "Los partidos políticos y el gobierno de la crisis en Argentina", en revista *Sociedad*, núm. 2, Buenos Aires.
- Doti, J., 1999, "Intervención", en C. Altamirano *et al.*, "Debates sobre la transición", en revista *Punto de Vista*, diciembre de 1999.
- Eichelbaum, C., 1999, "Deuda externa, nuevo eje de diferenciación para Duhalde", diario *Clarín* del 16 mayo.
- Feinman, J. P., 1999, "Otro invierno que pasar", en diario *Página 12* del 5 junio.
- Fernández, A., 1999, "El ocaso del poder", en diario *Página 12* del 9 de mayo.
- Fernández Canedo y J. L. Velázquez, 1999, "Me equivoqué al dar marcha atrás", en Suplemento Económico de diario *Clarín* del 16 de mayo.
- Fraga, R., 1999, "La agenda de la gente", en revista *Noticias* del 20 de marzo.
- Franco, M. y D. Heller, 1999, "Mi primera vez", en revista *Noticias* del 7 de junio.

- Gabeta, C., 1999, "Sin ilusiones", en revista *Tres Puntos* del 13 de mayo de 1999.
- Gargarella, R., 1995a, *Nos los representantes*, Ed. Ciepp/Miño y Dávila, Buenos Aires.
- Gargarella, R., 1995b, "El ideal de la democracia deliberativa", en Revista *Sociedad*, núm. 6, Buenos Aires.
- Garretón, M., 1997, "Representatividad y partidos políticos", en T. Manzy y M. Zuazo M, *Partidos políticos y representatividad en America Latina*, Editorial ILDIS / Nueva Sociedad, Buenos Aires.
- Grondona, M., 1999a, "Concertación ahora: luces y sombras", en diario *La Nación* del 12 de septiembre.
- Grondona, M., 1999b, "Duhalde o De la Rúa: he aquí la cuestión", en diario *La Nación* del 13 de junio.
- Grondona, M., (1999c, "El país frente a sí mismo", en diario *La Nación* del 20 de junio.
- Gruner, E., 1998, *Las formas de la espada*, Editorial Colihue, Buenos Aires.
- Guéhenno, J. M., 1995, "El fin de la democracia", Ed. Paidós, Buenos Aires.
- Jorquera, M., 1999, "La compra de votos tuvo su traspie en la localidad de Moreno", en diario *Clarín* del 10 de mayo.
- Laclau, E., 1990, *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires.
- Landi, O., 1999, "El malestar en la política", en suplemento *Zona* del diario *Clarín* del 9 de mayo.
- Lavagna, R., 1999, *Neoconservadurismo versus capitalismo competitivo*, Editorial FCE, Buenos Aires.
- Lechner, N., 1995, "La democracia entre la utopía y el realismo", en *Revista Internacional de Filosofía Política*, núm. 6.
- Lechner, N., 1996, "Las transformaciones de la política", en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 1.
- Lefort, C. 1983, "Democracia y advenimiento de un lugar vacío", en C. Lefort, *La invención democrática*, Ed. N. Visión, Buenos Aires.
- Llach, J., 1999), "Reportaje", en diario *Página 12* del 16 de junio.
- Machinea, J. L., 1998, "Si cambiamos las reglas del juego hay golpe de mercado", reportaje en Suplemento Económico del diario *Página 12* del 27 de diciembre.
- Marramao, G., 1990, "Palabra clave más allá de los esquemas binarios...", en N. Lechner, *Pensar la política*, UNAM, México.

- Minsburg, N., 1999, "Trasnacionalización, crisis y papel del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial" en A. Borón *et al.*, *Tiempos Violentos*, Editorial Eudeba, Buenos Aires.
- Morales Solá, J., (1999), "Una semana que se jugó con fuego", en diario *La Nación* del 23 de mayo.
- Moujan, A. y Gago, V., 2000, "En casi todo el interior...", en diario *Página 12* del 11 de enero.
- Neri, A., 2000, "Mejor, distribuir el poder", en diario *Clarín* del 17 de enero.
- Nielsen, J., 1999, "Vista a la derecha", en diario *Página 12* del 2 de noviembre.
- Notchef, H., 1994, "Los senderos perdidos del desarrollo", en Aspiazu y Notchef, *El desarrollo ausente*, Editorial Tesis / Norma, Buenos Aires .
- Novaro, M., 1995, "El debate contemporáneo sobre la representación política", en revista *Desarrollo Económico*, vol. 35, núm. 137.
- Novaro, M., 1999, "Si la política no cambia pierde la gente", en diario *Clarín* del 20 de septiembre.
- Nudler, J., 1999, "Dos leyes y un nudo", en diario *Página 12* del 29 de mayo.
- Nudler, J., 2000, "El Salvador es más seguro", en diario *Clarín* del 22 de enero.
- Nun, J., 1999, "Impuestos para la equidad", en diario *Clarín* del 8 de junio.
- O'Donnell, G., 1992, ¿Democracia delegativa?, en revista *Cuadernos del CLAEH*, núm. 61, Montevideo.
- Paramio, L., 1993, "Consolidación democrática, desafección política y neoliberalismo", en *Cuadernos del CLAEH*, núm. 68, Montevideo.
- Pasquini Durán, J. M., 1999a, "Semejantes", en diario *Página 12* del 5 de junio.
- Pasquini Durán, J. M., 1999b, "Las venas abiertas", en diario *Página 12* del 12 de junio.
- Petras, J., 1997, *Neoliberalismo en América Latina*, Ed. Homo Sapiens, Rosario, Argentina.
- Portantiero, J. C., 1989, "La democratización del Estado", en *La producción de un orden*, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires.
- Portantiero, J. C., 1993, "Revisando el camino...", en revista *Sociedad*, núm. 2.
- Pucciarelli, A., 1999, "¿Crisis o decadencia? Hipótesis sobre el significado histórico de algunas transformaciones recientes de la sociedad argentina", en *Revista de Estudios Sociológicos*, El Colegio de Mexico, tomo XVII, núm. 49, enero-abril.
- Quevedo, L. A., 1999, "La campaña de los récords", en diario *Clarín* del 18 de septiembre.
- Ríos, R., 1999, "Los votos de la interna se perdieron en el espacio", en Suplemento *Zona* del diario *Clarín* del 16 de mayo.

- Roffo, A., 1999, "La década menemista es un claroscuro, como la Argentina", en diario *Clarín* del 14 de noviembre.
- Rosenzvaig, E., "Tucumán, la goyesca", en diario *Clarín* del 13 de junio.
- Tarcus, H., 1995, "La ilusión democrática", en revista *El Rodaballo*, núm. II, Buenos Aires.
- Thieberger, M. y Braslavsky, G., 1999, "La rebelión de la indiferencia", en Suplemento *Zona* del diario *Clarín* del 15 de julio.
- Valiente Noailles, E., 1999, "Paisaje lunar", en revista *Noticias* del 20 de marzo.
- Velázquez, J. L., 1999, "Para Roque, la última palabra la tiene el mercado", en diario *Clarín* 14 de mayo.
- Velázquez, 1999, "El mercado vota primero", en diario *Clarín* del 17 de junio.
- Verbitsky, H., 1999, "Hay vida después de la deuda", en diario *Página 12* del 22 de junio.
- Zunino, E., 1999, "La clase política", en revista *Noticias* del 20 de mayo.